

ANTROPOLOGÍAS HECHAS EN ECUADOR

JOSÉ E. JUNCOSA B., FERNANDO GARCÍA S.,
CATALINA CAMPO I., TANIA GONZÁLEZ R.
(EDITORES)

TOMO I

ANTOLOGÍA-VOLUMEN I



ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA





**ANTROPOLOGÍAS
HECHAS EN ECUADOR**

José E. Juncosa B., Fernando García S., Catalina Campo I., Tania González R. (editores)

Antropologías hechas en Ecuador. Antología-volumen I / José E. Juncosa B., Fernando García S., Catalina Campo I., Tania González R. (Editores)

Ira. Edición en español. Asociación Latinoamericana de Antropología; editorial Abya-Yala; Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), 2022

496p.; tablas.; gráficos; mapas.

ISBN:

978-9978-10-648-8 OBRA COMPLETA

978-9978-10-649-5 Volumen I

ISBN DIGITAL:

978-9978-10-653-2 OBRA COMPLETA

978-9978-10-655-6 Volumen I

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Catalogación en la fuente – Asociación Latinoamericana de Antropología

© Asociación Latinoamericana de Antropología, 2022

© José E. Juncosa B., Fernando García S., Catalina Campo I., Tania González R. (editores), 2022

Ira Edición, 2022

Asociación Latinoamericana de Antropología

Editorial Abya-Yala

Universidad Politécnica Salesiana (UPS)

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador)

Diseño de la serie: Editorial Universidad del Cauca

Fotografía de portada: *Awame, mujer waorani con mono capuchino blanco*, Bamenó, Yasuní, 2018, Franziska Muller

Diagramación: Editorial Abya-Yala

Diseño de carátula: Editorial Abya-Yala

Editor general de la colección: Eduardo Restrepo

Copy Left: los contenidos de este libro pueden ser reproducidos en todo o en parte, siempre y cuando se cite la fuente y se haga con fines académicos y no comerciales.

Edición 2022

Contenido

Prefacio

Presentación

Nota sobre la edición

1. Antropología amazónica

Dar nombres a los árboles

LAURA M. RIVAL

Un cuerpo para soñar

ANNE-GAËL BILHAUT

2. Antropología andina

El gobierno del pueblo indígena colonial

HUGO BURGOS GUEVARA

El liberalismo del temor y los indios

MERCEDES PRIETO

Las exportaciones y los viajes

JEROEN WINDMEIJER

La construcción de la comunidad indígena

LUIS ALBERTO TUAZA CASTRO

3. Antropología de la Costa

No estaban muertos andaban de parranda: percepciones
y autopercepciones de la identidad chola en la Costa ecuatoriana

SILVIA G. ÁLVAREZ

Los actores del conflicto y sus características socioculturales

PABLO MINDA

4. Antropología y lingüística

Estado del arte de la estandarización de la escritura del quichua ecuatoriano

LUIS MONTALUISA CHASIQUIZA

Sobre la fascinante objetividad

JANIS B. NUCKOLLS

5. Antropología y educación

Aportes de la antropología a las ciencias de la educación

JUAN BOTTASSO, SDB

Racismo en colegios de élite

LYDIA ANDRÉS

6. Cultura y naturaleza

Los criterios del buen vivir

PHILIPPE DESCOLA

Pidgins transespecies

EDUARDO KHON

7. Antropología, economía y desarrollo

Reciprocidad, trueque e intercambio: la moralidad del intercambio
y de los créditos

EMILIA FERRARO

Experiencias de desarrollo rural en la era neoliberal

VÍCTOR BRETÓN SOLO DE ZALDÍVAR

El viaje del chocho, una semilla ancestral: gentes y paisajes que albergan su camino

ALEXANDRA MARTÍNEZ-FLORES, GUIDO RUIVENKAMP Y JOOST JONGERDEN

Sobre los autores

Sobre las instituciones

Experiencias de desarrollo rural en la era neoliberal¹

VÍCTOR BRETÓN SOLO DE ZALDÍVAR

Es indudable que el proceso de desarrollo rural produjo efectos positivos concretos en el sentido de ciudadanía de los campesinos y en el replanteamiento de las relaciones entre estos y el Estado. Entre estos efectos se destacan: a) la legitimación del rol de las organizaciones campesinas como mediadoras entre los campesinos y el Estado, a más de sus roles tradicionales de reivindicación y representación; b) la paulatina consolidación y reconocimiento de las ONG y su creciente potencialidad para integrarse en una triangulación de acciones que involucre a las organizaciones campesinas se segundo grado; c) la conformación paulatina de una conciencia de ciudadanía en el campesinado que se refleja en una demanda por calidad y cantidad de servicios; y d) la puesta en práctica de algunos mecanismos de participación, como los pasos hacia la democratización de la gestión a través de las representaciones campesinas en los proyectos, el trabajo grupal con organizaciones campesinas en transferencia de tecnología, infraestructura y mercado, y la conciencia de que hay que facilitar a los pequeños productores el acceso al crédito (Carlos Arrobo y Mercedes Prieto, 1995: 16).

Introducción

Uno de los aspectos que más sorpresa causaba a los analistas de la “cuestión agraria” durante las décadas finales del siglo XX, era la presencia —recurrente y concentrada— de las ONG en numerosas áreas rurales de América Latina. Es como si, en ese tiempo, tales entidades hubieran ido adquiriendo protagonismo

1 Capítulo 6 de *Toacazo: en los Andes equinocciales tras la Reforma Agraria* (2012, pp. 331-378). Quito: Abya-Yala; FLACSO.

—con mayor o menor intensidad, según los países y las regiones— al tiempo que los poderes públicos —con el Estado a la cabeza— se replegaban de esos ámbitos tradicionales de intervención. Ésa era justamente la impresión que daba la situación de muchas zonas del callejón interandino ecuatoriano, escenario en el que convergía la existencia de importantes contingentes de población indígena-campesina (Zamosc, 1995), la afluencia de proyectos impulsados, financiados y evaluados por ONG, y la conformación cada vez mayor de organizaciones populares —“beneficiarias” de esos proyectos— con una notable capacidad de intermediación y de negociación con las agencias de desarrollo (Bretón, 2001 y 2004). De alguna manera, ese énfasis privatizador de las intervenciones arrancó de la consolidación del DRI a modo de alternativa a una Reforma Agraria ya en declive como paradigma rector de las políticas públicas, y de la pérdida paulatina de fuelle del rol impulsor del Estado de los mismos proyectos DRI diseñados desde su maquinaria burocrático-administrativa.²

Aunque en Toacazo fue mucho más remarcable la impronta que dejaron sobre el terreno las ONG (CESA entró en escena ya en 1971), merece la pena recordar el discurso con que el propio Estado ecuatoriano se propuso inducir la modernización capitalista del sector rural en un ambiente posreformista y a las puertas de los ajustes de corte neoliberal durante la primera mitad de los años ochenta. Un espíritu en cierto sentido anticipado por la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario de 1979, que imponía un primer giro con respecto al proceso redistributivo iniciado en 1964 y que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo (1980-84).³ En el caso que nos ocupa, las tierras altas de Toacazo quedaron dentro de un proyecto de mucho mayor alcance territorial que el de CESA (62 200 hectáreas frente a solo 15 500), el conocido como DRI TTP (Tanicuchí-Toacazo-Pastocalle), que contemplaba tanto actuaciones productivas (transferencia de tecnología, forestación, ganadería, apoyos a la comercialización) como subproyectos de infraestructuras y de fortalecimiento organizativo (casas comunales, agua entubada, mejora de caminos, entre otros). Lo que quiero remarcar aquí es la importancia retórica que desde el mismo Estado se daba a la capacidad que debía adquirir el campesinado andino, no solo para organizarse y poder así canalizar ordenadamente sus demandas, sino también para facilitar las innovaciones técnicas necesarias a fin de adaptarse a la nueva coyuntura (léase adopción del paquete tecnológico de la revolución verde) y ser actor partícipe de los proyectos de desarrollo. El objetivo prioritario del DRI era, pues:

[...] entregar a la población campesina el poder de decisión y control real sobre el desenvolvimiento del proyecto; y afirmar la integración de los campesinos en torno a intereses comunes, concentrando sus energías

2 Ver capítulo 2, “Hacia la etnificación del desarrollo rural”.

3 Dicho Plan identificó 17 proyectos DRI y creó el Subsistema de Desarrollo Rural Integral: la SEDRI y las correspondientes unidades ejecutoras de los proyectos serían las responsables de su puesta en marcha.

y recursos para reivindicar sus demandas y satisfacer sus necesidades. Sin embargo, no basta con que los campesinos tomen conciencia de su situación y resuelvan actuar en defensa de sus intereses. Necesitan desarrollar conocimientos y elaborar instrumentos prácticos para superar las limitaciones, en que la participación, capacitación y organización son aspectos inseparables de un mismo todo [...]. La participación, capacitación y organización campesinas no solo se buscan en la ejecución del proyecto, sino también se dan en la realización del diagnóstico y la formulación del mismo (SEDRI, 1983: II).

Sorprende el tono del lenguaje, pues se parece mucho al tipo de propuestas que, casi veinte años después, aterrizarán desde las más altas instancias del aparato del desarrollo en nombre del “empoderamiento”, del fomento del capital social y del etnodesarrollo.⁴ La diferencia, sin embargo, estriba en que, mientras en estas últimas iniciativas se partirá de una imagen edulcorada y esencializada del “comunitarismo” andino, a la hora de diseñar el DRI de los ochenta se era muy consciente del proceso de erosión por el que estaban atravesando las formas de gestión comunitaria de los recursos, aunque se continuaba apostando a su “recuperación” y apuntalamiento como estrategia de cara a la obtención de economías de escala por parte del campesinado indígena:

El origen de las comunas en su forma legal actual está en el quiebre del régimen hacendatario debido a la presión demográfica y a la incipiente organización campesina. El ejemplo de la Reforma Agraria iniciada por la Iglesia católica contribuyó a acelerar el proceso de repartición de la tierra conformando agrupamientos de campesinos con una problemática común, iguales niveles de educación, y una cultura similar. Ello ha permitido que subsista una cohesión al interior de una organización multidimensional, como lo es la comuna, en la que se funde en una sola forma el sistema jurídico del Estado y la forma asociativa tradicional cuyos orígenes se remontan a la época incásica (*ayllu*) y la comuna española. Sin embargo, en esta organización no está presente, como característica propia de ella, la forma de trabajo colectivo, y los ejemplos de esfuerzos asociativos que se dan en el área del proyecto, constituyen más bien la excepción que la regla [...]. La tierra recibida como resultado de la división de la gran propiedad y afectación por el IERAC, debió haberse trabajado de forma comunitaria y constituir unidades de producción de tamaño relativamente grande, con diversas características productivas y variadas condiciones ecológicas dentro de la misma unidad. Sin embargo, la presión de los mismos campesinos originó la entrega en forma individual de pequeñas parcelas cuya producción, en la gran mayoría de los casos, solo alcanza para el autoconsumo, a niveles de subsistencia [...]. Los suelos de menor

4 Ahí quedan PRODEPINE y PRODECO. Ver nota 33 del capítulo 2.

calidad y potencialidad productiva (generalmente páramos) se han dejado para la comuna; pero una vez más en su utilización predomina el carácter individual de la explotación pecuaria [...]. Se aprecia que esta organización, casi natural, que es la comuna, presenta una característica de individualismo en los aspectos productivos aunque aparezca como una comunidad estrechamente vinculada en los aspectos sociales y de presentación de sus demandas. Opera como un organismo de defensa frente a la existencia de fuerzas externas y de preservación de sus valores culturales (SEDRI, 1983: 73-74).

Se trataba de un estado de opinión sin duda muy extendido entre el *staff* técnico de las agencias de desarrollo de la época que marcó, también, el quehacer de CESA y otras ONG en la zona de Toacazo.⁵ La presencia del DRI TTP en las tierras altas de Toacazo fue, con todo, escasa y periférica, pues eran percibidas como “territorio de intervención de CESA” (no en vano el proyecto que esta institución estaba desarrollando allí ya se denominaba TTP). Los técnicos de CESA, además, veían al DRI estatal —presente en Toacazo entre 1982 y los años finales de la década, aunque cada vez más debilitado— como si estuviera atenuando la labor realizada por la agencia tras años de presencia en aquel lugar. Por decirlo de modo llano, para CESA el DRI “estaba desestabilizando la formación de la comunidad campesina, del movimiento campesino, porque a ellos [a los técnicos de la SEDRI] no les interesaba absolutamente nada”, a pesar de las rimbombantes declaraciones de principios reproducidas más arriba.⁶ Es decir, que el sesgo del DRI estatal era más tecnocrático que la orientación de CESA, pese al desplazamiento de esta última hacia posiciones proclives a la mera transferencia tecnológica y a la inserción mercantil de los campesinos en el mercado, como veremos a continuación. Por eso realmente no pudo llegarse a ninguna coordinación entre la SEDRI y CESA en el territorio de la UNOCANC.

Los vaivenes del proyecto campesinista de CESA

Si la historia del desarrollo rural en el Ecuador de la segunda mitad del siglo XX pudiera encarnarse en una sola persona, esa respondería sin duda al nombre de Fausto Jordán. Director del IERAC, de CESA, de la SEDRI, ministro de Agricultura, presidente del Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos, entre otros muchos roles, su biografía ha transitado por casi todos los vericuetos imaginables de la gestión de las políticas y las

5 Eso explica la insistencia obsesiva en la cooperativa Cotopilaló como punta de lanza del cambio en las antiguas haciendas de la Curia.

6 Entrevista a Miguel Gaibor en Quito (19/09/2003). Aunque el DRI estatal no tuvo mucha presencia en la zona del proyecto de CESA, sí intervino, sin embargo, en las comunidades del Bajío de Toacazo, fuera de la influencia de la Central.

intervenciones —tanto en la esfera pública como en la privada— sobre el sector campesino del país. Desde la atalaya que brinda a la experiencia acumulada la distancia de las más de tres décadas transcurridas, Jordán reflexionaba en el año 2003 sobre el espíritu y el estado de opinión que fueron cristalizando alrededor del proyecto campesinista de CESA:

“En la última parte de los años sesenta concluyó un proceso de Reforma Agraria con ciertas intenciones de cambio, pero en el proceso de la Reforma Agraria estatal pienso que el desempeño de los que comenzaron esta aventura desde la función pública tuvo algunas marcas que llamaron la atención por la originalidad, la transparencia y el compromiso de cambio. Entonces fui invitado por la Confederación de Sindicatos Cristianos a dar una charla sobre mi posición personal sobre la Reforma Agraria. Abí es cuando yo creo que prendió el interés de algunas de las personas, intelectuales y profesionales, que estuvieron en esa reunión y que tenían vínculos con una Iglesia de nueva generación para entonces emprender prácticamente las iniciativas de un proceso de Reforma Agraria en predios de la Iglesia (hablamos de la Iglesia católica). Entonces, cuando concluí mi compromiso conmigo mismo de seguir en el sector público frente a la Reforma Agraria, porque vino un gobierno conservador con el que no era posible seguir haciendo lo poco que se hacía, fui insinuado de iniciar los estudios de Reforma Agraria en predios de la Iglesia ecuatoriana.

Esa Reforma Agraria en predios de la Iglesia ya nos permitió saber, por la experiencia anterior en el sector público, que recibir tierras no es todo. Algún indígena de las tierras del Estado, de las extierras de la Iglesia, de esas que fueron quitadas [desamortizadas] a comienzos del siglo pasado, me decía cuando recibió la tierra: “Nos han dado suelo y cielo”; esto significa que aquí está el suelo y el cielo, lo demás se han llevado: maquinaria, animales, cultivos, todo se han llevado; así que significaba el abandono... La tierra es un activo, pero si no tengo instrumentos, por precarios que sean, no puedo trabajarla; si no tengo conocimientos no puedo seguir más adelante para mejorar su producción y su productividad; si no conozco el mercado no sé a qué me dedico; si no tengo recursos financieros no sé cómo poner nuevas semillas, cómo comprar un arado, cómo comprar un tractor; etc. Y si no tengo todos estos conocimientos, cómo hago además para tenerlos. Esto significaba que había que complementar ese proceso de entrega de tierras con capacitación, con asistencia técnica, con crédito, digamos que estos eran los puntos principales, y con servicios de comercialización. Esto es lo que en esos tiempos podría llamarse una Reforma Agraria integral. Entonces, con esos antecedentes, la Reforma Agraria en predios de la Iglesia consistía en un acuerdo con el gobierno de cada diócesis a través de su obispo para darle precio a esa tierra que se iba a transferir a los

*campesinos. Y ahí ya se conocía el brillo de sus ojos de cada obispo, si le gustaba mucho o poco el dinero”.*⁷

La CESA es una de las ONG más importantes y con más tradición en el Ecuador. Desde 1967, año en que vio la luz estrechamente vinculada al proceso redistributivo que se estaba llevando a cabo en tierras de la Curia, ha continuado hasta el momento presente esforzándose en la implementación de proyectos de desarrollo en el medio rural. Nacida al calor de la apertura de la Iglesia explicitada en el pronunciamiento favorable de la Conferencia Episcopal para la ejecución de una Reforma Agraria en el país,⁸ CESA defendía la tesis de que la sociedad ecuatoriana se caracterizaba por la secular marginación de los pequeños campesinos en la toma de decisiones políticas y económicas. En consecuencia, apostó por concentrar sus actividades en esos sectores excluidos, fomentando su proceso organizativo, su capacitación y la prestación de todo tipo de servicios agrícolas (en un sentido técnico básicamente dependiente de los parámetros de la revolución verde) como vías de su integración social en condiciones de equidad: de ahí toda su filosofía campesinista, indigenista, participativa y defensora del rescate de los valores de una cultura andina más o menos idealizada. Valga como muestra el señalamiento estratégico incluido en sus estatutos:

Para prestar servicios en todo el territorio nacional, los que suscribimos procedemos a crear la fundación denominada CESA... Su fin es la promoción y educación campesina, inspirándose en los principios cristianos, mediante el establecimiento de servicios de asesoramiento y asistencia a las organizaciones campesinas en general, cualquiera que sea su adhesión religiosa o política, pero especialmente a las cooperativas, sindicatos, comunas y a sus miembros (citado en CESA, 1992: 9).

El primer trabajo importante de CESA fue la ejecución del Proyecto Piloto de Reforma Agraria en Tierras de la Iglesia, prueba inequívoca de la influencia que hasta ejercía en esos tiempos sobre la agencia; una situación en cualquier caso comprensible en la medida en que fue precisamente la Iglesia católica quien aportó extensiones considerables sobre las que materializar las primeras iniciativas. De hecho, el objetivo de esta etapa fundacional de la Central era “fomentar y desarrollar los

7 Entrevista a Fausto Jordán en Quito (26/09/2003).

8 Una reforma, no lo olvidemos, en la cual estaba implicada la misma Iglesia dada su situación de latifundista. La Carta Pastoral del Episcopado Ecuatoriano, fechada en abril de 1963, señalaba en este sentido: “Al expropiar las tierras legítimamente poseídas, el Estado debe pagar una indemnización cuya cuantía debe medirse según el grado de cumplimiento de la función social y en ningún caso la indemnización ha de constituir un premio a la incapacidad o desidia. La diferencia que pudiera presentarse respecto del precio real, bien puede considerarse como justa sanción...”. A lo que añadía: “...nosotros los Pastores, no podemos permanecer indiferentes ante los padecimientos de orden temporal que sufren tantos hijos nuestros” (citado en CESA, 1992: 8).

servicios de asistencia crediticia, técnica y organizativa de los sectores campesinos que han venido trabajando en las haciendas que la Iglesia mantenía y en las cuales debía ejecutar programas de redistribución de tierras” (CESA, 1974: 6). Es necesario, no obstante, precisar que las cosas no resultaron siempre fáciles, pues se trataba de negociar “palmo a palmo con cada obispo por cada predio y eso significó obviamente obispos que tenían la plena predisposición para apoyar al programa” frente a otros que “prefirieron inclusive vender a personas particulares y no participar en el proyecto de Reforma Agraria” (CESA, 1992: 14).⁹ Un buen ejemplo es el de las haciendas eclesiásticas de Toacazo, partidas entre las diócesis de Latacunga (Razuyacu) y Ambato (Cotopilaló) y con destinos muy diferentes, como vimos, en función de los intereses coyunturales y las predilecciones de los respectivos preladados del momento.¹⁰

Tras la disolución y reparto de las haciendas eclesiásticas, CESA entró a plenitud en el paradigma DRI. En esa tesitura, no se trataría tanto de perseguir la “incorporación” del campesino a la sociedad mayor en la que se insertaba, que también, como “de dotarle de elementos suficientes para consolidar su poder de expresión y negociación propiciando sus posibilidades de cambio” (CESA, 1992: 23). Fieles a estos propósitos, durante los años dorados del *boom* petrolero se llegó a determinar:

[...] la necesidad de potenciar la participación campesina en todas las esferas de sus relaciones y se define a la capacitación como el elemento globalizante y los demás “servicios” (comercialización, crédito, mecanización agrícola, asistencia técnica...) pasan a constituirse en “herramientas” o medios que posibilitan el contacto y diálogo permanente con los campesinos y no fines o metas en sí. Es así, bajo este marco conceptual, que CESA inicia la ejecución de Proyectos de Desarrollo Rural Integral en algunas zonas del país, principalmente en aquéllas en donde anteriormente apoyó con el Proyecto de Reforma Agraria en Predios de la Iglesia (CESA, 1992: 23).

La central se ha impuesto un objetivo específico que es el impulsar el movimiento campesino a través de una progresiva tecnificación de las organizaciones y la concientización de sus miembros a fin de que aquéllas se constituyan en un poder efectivo que coadyuven al cambio social (CESA, 1974: 10).

Dentro de esta etapa es remarcable el Programa de Fondo Conjunto entre CESA y el Banco Nacional de Fomento (1977), que tenía como objeto estimular las actividades

9 Chimborazo fue la provincia donde más repercusión tuvo el programa, pues allí se redistribuyeron y/o se colaboró con el IERAC en el reparto de 41 129 hectáreas (el 73,39 % del total). Una superficie que procedía, básicamente, de cuatro grandes propiedades eclesiales transferidas por Monseñor Proaño.

10 Ver capítulo 3, “La cara campesinista de la Iglesia: Cotopilaló”.

agropecuarias de los pequeños productores a través de la concesión de préstamos. Por medio de esta iniciativa se pretendía “llegar con recursos financieros hacia los sectores campesinos que usualmente están al margen de las fuentes convencionales de crédito” (CESA, 1992: 51), constituyendo el sujeto de la acción, no los campesinos individualmente considerados, sino la organización campesina. De ahí que los únicos beneficiarios posibles fueran los grupos reconocidos jurídicamente o de hecho. Más adelante, conforme avanzaba la década de los ochenta, se iban constriñendo los recursos estatales invertidos en el sector rural y comenzaban a articularse y emerger con fuerza las reivindicaciones de carácter étnico, CESA continuó insistiendo en la línea de fortalecimiento organizativo, incorporando los elementos identitarios a la capacitación a fin de reforzar y adecuar aquél a los tiempos que corrían. La nueva situación, de hecho, demandaba:

[...] que la institución priorice la formación de promotores, primero en aspectos metodológicos comunicacionales para facilitar el acercamiento y diálogo con el mundo campesino; y segundo en aspectos teórico-conceptuales para que el promotor tenga una aproximación a la realidad del campesinado con el cual trabajamos [...]. A través de la Educación Popular, los campesinos y sus respectivas organizaciones son los verdaderos actores de su desarrollo (CESA, 1992: 62).

La evolución de CESA entre su fundación a finales de los sesenta y el año 2000, en suma, refleja bastante bien el tránsito de algunas ONG emblemáticas del área andina desde unas posturas rupturistas (o cuando menos críticas) para con el desarrollismo dominante y excluyente de la época a otras más asépticas en relación con los parámetros neoliberales de los ochenta y noventa; desde un apoyo explícito a la Reforma Agraria y al acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, a una priorización monotemática, de la década de 1980 en adelante, de las actividades de desarrollo *stricto sensu*, tales como apoyo técnico, mercantilización, capacitación o mejoras productivas de diversa índole. Fue muy importante ahí, por supuesto, la orientación de las financieras foráneas, cada vez más favorables a las actividades exclusivamente de corte tecno-económico:

Desde 1990 [...] empezó a fraguarse un cambio de orientación institucional que se materializó, en un primer momento, en una nueva política de personal definida por una mayor especialización frente a los genéricos y polivalentes promotores rurales (giro tecnocrático) y por la preferencia de la contratación temporal en detrimento de la estabilidad laboral. Finalmente, en 1997 (¿coincidencia con el 30º aniversario de la institución?), culminó el proceso definitivo de revisión de los objetivos y la estructura de CESA con la finalidad de *modernizar* y reconvertir la institución en los siguientes términos: descentralización y autonomía operativa de las sedes regionales, reducción de empleados y gastos burocrático-administrativos, y potenciación de la capacidad intelectual (léase técnica) del nuevo personal

contratado. Para Fernando Terán, responsable en 1999 de la sede de CESA en Riobamba, las razones de semejante metamorfosis hay que buscarlas en el contexto macroeconómico (el avance de la globalización obligó a priorizar la eficiencia y la sostenibilidad económica de los proyectos por encima de cualquier otra consideración); en las exigencias de las agencias de cooperación internacional (menos “generosas” que antes y más estrictas en la garantía de rentabilidad para sus inversiones); y en el propio debate interno, que condujo —como adaptación a todo lo anterior— al afianzamiento del paradigma empresarial, en el que la finalidad es poder ir transfiriendo los proyectos a las organizaciones campesinas para que asuman, poco a poco, el *riesgo* de su gestión (Bretón, 2001: 244).

Pero más allá de la incidencia que sobre el quehacer de CESA ejerció la economía política del neoliberalismo, lo cierto es que desde sus inicios como agencia se enfrentaron en su interior dos tendencias muy marcadas. Una, de carácter más izquierdista, y que iba desde los promotores rurales hasta algunos miembros de la directiva de la institución, tenía una vocación explícitamente política y desempeñó un papel muy visible hasta la primera mitad de los años ochenta. Frente a esta, siempre hubo una visión de corte más demócrata-cristiano, con un perfil tecnocrático en su acepción del desarrollo rural y que, no sin conflictos, terminó desplazando a los promotores y gestores escorados hacia la izquierda.¹¹ Se trataba, desde luego, de una concepción compatible con los parámetros de las políticas neoliberales consolidadas a partir de entonces y que posibilitó los cambios mencionados en el operar de CESA a medida que los exigía el contexto general en el que se desenvolvía la economía del país.

En consonancia con esta trayectoria, la primera etapa de la intervención de CESA en Toacazo privilegió el apoyo indiscriminado a la organización campesina local: es la época, tras la Reforma Agraria, de la presencia en las tierras altas de Germán León y de los alfabetizadores miristas, en pleno conflicto con los velasteguistas del pueblo y el patrón Tapia. Más adelante, sin embargo, y en concordancia con la propia evolución del debate en el seno de CESA, el proyecto adquirió un matiz más técnico a favor de la transferencia tecnológica y, acaso, de una vía *farmer* de desarrollo capitalista.

La intervención de CESA en las tierras altas de Toacazo

Como mencioné, las tierras no son suficiente, entonces se dio lugar a un proceso de capacitación, yo diría que producto de eso es la organización que se dan los campesinos a través de la capacitación; aprendieron que si no estaban organizados no podían defender sus derechos, que si no estaban

11 Entrevista a Miguel Gaibor en Quito (19/09/2003).

organizados no podían hacer valer su voz, que si no estaban organizados no le podían decir nada al señor Tapia, que si no estaban organizados no podían hablar al respetuoso cura que esté de líder de la Iglesia, y esto estaba inmerso en la capacitación. Es decir, la asistencia técnica tenía por objeto cómo se va a hacer para que tengan mejores variedades, mejores rendimientos; cómo captar agua para que las tierras tengan una posibilidad de ser manejadas de mejor forma, con más oportunidades de ocupación porque el agua da origen a más de un cultivo en el año, asegura que no estemos sujetos a las eventualidades de que el agua caiga del cielo cuando pueda y quiera, sino que se puede manejar el agua. Esto también necesita una organización con ciertos elementos técnicos que exigen conocimientos, es —¿cómo diría yo?— ponerle contra la pared a una institución como CESA frente a los campesinos para poder ir manejando procesos de capacitación, de organización, de transferencia de tecnología, que no se pueden hacer tampoco si no hay crédito.¹²

Era una necesidad el organizarse, porque solo organizadamente podían enfrentarle al cura, al terrateniente. Ellos sabían que estaban explotados, pero no sabían cómo dar la cara a los poderes establecidos... CESA tenía un discurso en beneficio de los campesinos, pero a la final lo que estaba haciendo es retardando un proceso de cambio, tapando ciertos baches que eran responsabilidad del Estado y que, como responsabilidad del Estado, tal vez desviaba la tensión social real de los campesinos. Y en ese sentido los campesinos no tenían las posibilidades, ni la plataforma de lucha para seguir adelante, porque CESA, de una forma o de otra, sustituía ciertas demandas que los campesinos justamente abanderaban para organizarse y dar ya una lucha al sistema.¹³

CESA llegó a Toacazo de la mano de la transferencia de la hacienda Cotopilaló en 1971 con la intención de materializar una Reforma Agraria de carácter integral que, aunque de pequeña escala, demostrara la viabilidad de una vía campesina de desarrollo capitalista. Se trató de una intervención dilatada en el tiempo (hasta 1992), no exenta de contradicciones que, de alguna manera, combinó el apoyo a la organización de segundo grado y a las cooperativas establecidas con la capacitación, la generalización del paquete tecnológico de la revolución verde, la inversión en infraestructuras (camino, riego, agua entubada, casa comunal) y el crédito. Todo ello siguiendo un plan estructurado en diversas fases y financiado principalmente por agencias europeas: la redistribución de la antigua hacienda de la Curia y la puesta en marcha de las cooperativas Cotopilaló y Vicente León primero (1971-1981) y las cuatro etapas del Proyecto Tanicuchí, Toacazo y Pastocalle (TTP), homónimo del DRI

12 Entrevista a Fausto Jordán en Quito (26/09/2003).

13 Entrevista a Germán León en Quito (15/07/2010).

estatal,¹⁴ después (1981-1992). En el TTP 1 (1981-1984) se incidió, sobre todo, en la construcción y mejora de infraestructuras básicas (tomas de agua, casas comunales y caminos). Con el TTP 2 (1984-1987) se amplió el programa hacia el apoyo para el aumento de la productividad: se intentó “familiarizar al grupo beneficiario con las diferentes posibilidades para el mejoramiento de la producción agrícola a través de la instalación de parcelas de experimentación y demostración”. El TTP III (1988-1991), por su parte, buscaba dar continuidad a lo realizado hasta el momento y consolidar los logros del Proyecto. Se pretendía profundizar la autonomía de la UNOCANC a fin y efecto de entregarle “la responsabilidad para la continuación de las diferentes medidas” (Ege, 1992: 7). Al no poderse alcanzar los objetivos previstos en la tercera fase, se amplió el TTP en un año más (hasta 1992), a modo de etapa final.¹⁵

Las diferentes fases del proyecto

Tras el arranque de las cooperativas, en 1978 se decidió impulsar un proyecto DRI en toda regla, aunque adaptado a las posibilidades logísticas y de gestión de CESA. A pesar de su denominación abarcativa, en sus orígenes el TTP solo cubría unas 2 400 hectáreas ubicadas a caballo entre las tres parroquias, las correspondientes a “campesinos propietarios de lotes de terreno comprendidos entre superficies de 0,1 y 4,9 hectáreas que están localizados en áreas identificadas como prioritarias” (CESA, 1978: 85). Más adelante, a partir de 1981, el TTP extendió sus actividades a un área aproximada de 15 500 hectáreas que, de hecho, y a pesar de ser considerada como “de influencia de las parroquias de Tanicuchí, Toacazo y Pastocalle”, respondían al *binterland* de Toacazo, siendo las comunidades beneficiarias filiales de la UNOCANC: el TTP llegó a casi todo el territorio bajo su influencia (figura 1), comprendiendo en su momento álgido a 17 organizaciones de base, entre comunas y cooperativas,¹⁶ con un total de 979 familias (CESA, 1989). El Proyecto se orientó desde el principio

14 La originalidad del nombre correspondía al de CESA.

15 Entre 1978 y 1981 el presupuesto ascendió a 1 772 800 dólares, financiados en un 49 % por instituciones extranjeras y el resto por instancias nacionales (tales como el Banco Nacional de Fomento y el Gobierno, entre otras: CESA solo asumió directamente el 6,9 % del costo) (CESA, 1978: 4). Desde 1981 CESA llevó a cabo el Proyecto TTP en colaboración con Agro Acción Alemana, que aportó 322 943 marcos alemanes en la primera fase, 380 252 en la segunda y 810 000 en el tramo final. Además de Agro Acción Alemana, otras financieras y organizaciones de desarrollo internacionales que apoyaron a CESA son, por este orden de importancia, la Cooperación Técnica del Gobierno Suizo a través de Intercooperation, ECLOF, Catholic Relief Service, entre otras más pequeñas (Ege, 1992: 17). Miguel Viera calcula la inversión directa canalizada a través de CESA en la zona en unos 879 000 dólares (2009: 43).

16 Cotopilaló, Vicente León y San Carlos como cooperativas; Yanahurco Grande, San Bartolo, Moya Grande, Moya San Agustín, Chisulchi Chico, Chisulchi Grande, Huingopana, Yanahurco Chico, Razuyacu Chiguanto, Manchacazo, Yanahurco San Antonio, San Francisco, Quinte San Antonio y Quinte Buena Esperanza como comunas.

hacia el fomento de cultivos comerciales entre las unidades campesinas (básicamente patatas, cebada, maíz y habas, en función de las características de los lotes y los diferentes pisos ecológicos), iniciando una ambiciosa política de inversiones que habría de pasar por infraestructuras (obras de irrigación, caminos de acceso), construcciones (casa comunal, centro de acopio, consolidación del nuevo poblado de Planchaloma como centro neurálgico de las tierras altas de Toacazo —en contraposición, por supuesto, al centro parroquial),¹⁷ crédito agrícola y ganadero, primeras adquisiciones de maquinaria (tractores) y énfasis en capacitación (agrotécnica, económico-contable y socio-organizativa), indispensable para garantizar la sostenibilidad del esfuerzo (CESA, 1978). Es remarcable que, dada la limitación espacial del Proyecto, los únicos beneficiarios reales de estos tres primeros años fueron los socios de las cooperativas surgidas de la exhacienda Cotopilaló: ellos y sus arrimados fueron los destinatarios de los insumos aportados, quienes conformaron el nuevo núcleo de Planchaloma y quienes, en definitiva, se hicieron con el control de la nueva organización en ciernes en aquel tiempo (la Mushuc Patria).

17 La Merced de Planchaloma es, desde entonces, el único núcleo poblado de la zona, y tiene el estatus jurídico de barrio. Sus primeros pobladores fueron los exhuasipungueros de las haciendas aledañas, aunque la mayor parte de su población actual es de segunda y tercera generación (exarrimados). Entrevista a José Chacha en Razuyacu Chiguinto (02/09/2003).

ÁREA T.T.P.

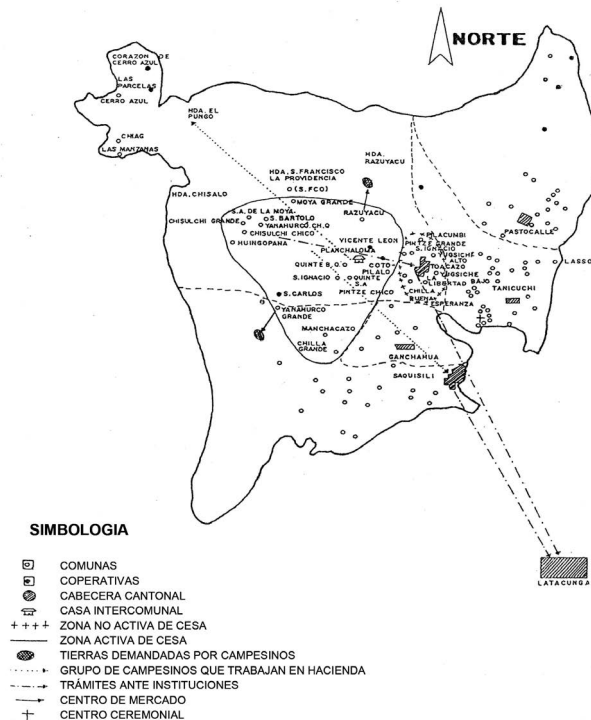


Figura 1. Croquis del alcance territorial del Proyecto TTP de CESA en el contexto de la gran área de intervención de Toacazo, Tanicuchí y Pastocalle (1987).

Fuente: CESA y UNOCANC, 1987: 3.

Una vez ampliada el área de intervención, las denominadas como fases 1 y 2 del TTP (1981-87) se propusieron programáticamente extender “a otras comunidades y grupos campesinos el apoyo en la construcción de obras de infraestructura que ayuden a mejorar su nivel y condiciones de vida”; “fortalecer el espíritu solidario y comunitario en antiguos grupos y/o organizaciones e iniciar el proceso” en otros nuevos; “aprovechar las acciones como elementos de capacitación que permitan a los grupos campesinos ir asumiendo posiciones de presión y demanda de servicios ante las instituciones que tendrían la obligación de otorgarlos”; y “abrir un trabajo de investigación en aspectos de comercialización” que facilitase buscar alternativas a la posición subordinada de los pequeños productores indígenas en los mercados locales y regionales; objetivos alcanzados en más del 80 % según las evaluaciones de

CESA (Moncayo, 1987: 11-12).¹⁸ Una vez más, el rubro que mayor impacto positivo generó fue el de las infraestructuras, básicamente en lo referente a la casa comunal de Planchaloma y a la construcción de sistemas de riego para las cooperativas Cotopilaló, Vicente León y San Carlos.¹⁹ El Proyecto operó, además, fórmulas de transferencia tecnológica —vía demostración en parcelas experimentales— que ameritaron por parte del evaluador el cuestionamiento de su finalidad:

El paquete tecnológico que se transfiere a los campesinos, si bien es cierto que está acorde con su realidad y posibilidades y eleva la productividad de la tierra, no es menos cierto que no es una alternativa para el “despegue” de los beneficiarios. Esta situación tiene relación con una interrogante, ¿hacia dónde se quiere llegar con los campesinos?: ¿solamente a elevar la productividad de la tierra? o, ¿mejorar realmente sus condiciones de vida? o, ¿reducir su tiempo invertido en la agricultura, en beneficio de actividades culturales, intelectuales, organizativas, etc.? (Moncayo, 1987: 16).

De igual manera, el servicio ofrecido por CESA a los campesinos a través de la puesta a su disposición de dos tractores ofrecía resultados ambivalentes, pues “frena la explotación que realizan los propietarios particulares de maquinaria agrícola (campesinos diferenciados o mestizos del pueblo de Toacazo)”, ya que la Central, “a través de acuerdos con la UNOCANC, fija los precios del servicio, que son menores a los generalizados en la zona”; al tiempo que coadyuvaba al deterioro de los recursos naturales, al facilitar la erosión eólica en detrimento de la

18 Ver Jordán (1985). El de la comercialización es un tema espinoso que merece algunos comentarios adicionales. Era una práctica habitual que, al concurrir a las ferias que semanalmente tenían lugar en Toacazo (en el tiempo de las haciendas), Saquisilí (los jueves) y Latacunga (los sábados), determinados intermediarios mestizos (los “arranchadores”) despojaron a los pequeños productores indígenas de sus excedentes a cambio de un precio arbitrario (en cualquier caso, siempre bajo en relación con la oferta y la demanda real). Ése fue uno de los cuellos de botella del Proyecto TTP y la búsqueda de mecanismos alternativos de comercialización fue una constante de todas las evaluaciones y las declaraciones de principios de las sucesivas fases de implementación. Con el paso de los años, si bien es cierto que fue cambiando la relación entre los productores de arriba y el mercado de Saquisilí y Latacunga en el respeto (digamos que ya los indígenas no se dejaban “arranchar” ni insultar como antaño), también es verdad que la parte del león de la comercialización siguió en manos de los intermediarios de abajo. La razón de que fuera tan difícil trascender ese estado de cosas es que las estructuras de comercialización responden a redes familiares y de compadrazgos de larga duración, generaciones de generaciones de intermediarios mestizos que han consolidado ciertas “reglas del juego” en los mercados pueblerinos hasta hoy imposibles de romper. Un indígena no puede llegar y montar su parada directamente, no le van a dejar y, si le dejan, nadie le va a comprar (similar a una estructura y un *modus operandi* de naturaleza mafiosa). Esa era (y es) una de las grandes debilidades de OSG políticamente fuertes como la UNOCANC. Entrevista a Francisco Román, director de CESA, en Quito (07/09/2003).

19 Las únicas sujeto de crédito, hasta 1987, a través del fondo de CESA con el Banco Nacional de Fomento.

calidad de los suelos (Moncayo, 1987: 18-19).²⁰ Con todo, y teniendo en cuenta el punto de partida —la presencia en la zona de numerosas relaciones de producción calificadas entonces como precapitalistas—, el evaluador concluía que, pese a haberse incrementado el nivel de ingreso de los campesinos (sobre todo en las cooperativas de la zona media):

[...] el reto es para el futuro: ¿qué hacer para no trabajar en beneficio del sistema, vía transferencia de excedentes? Aparte de estas consideraciones generales, surgen algunas interrogantes específicas: ¿Por qué no se realizaron acciones de apoyo en el aspecto pecuario?; ¿Por qué la conservación de suelos no ha sido realmente tratada?; ¿Qué sucedió con la comercialización, principal problema de los campesinos?; La elevación del ingreso es válida, pero ¿por qué no se propusieron soluciones más integrales? (Moncayo, 1987: 21-22).

Partiendo de ese punto, se planificó la tercera y última fase del Proyecto incidiendo en la capacitación (a través de seminarios, jornadas y giras de observación), el abordaje de nuevo de las posibles soluciones a las dificultades de comercialización de los pequeños campesinos de altura, el énfasis en culminar todo el esfuerzo inversor en caminos y obras de infraestructura básica, y los apoyos orientados a elevar la productividad y el nivel de las retribuciones del conjunto de las comunidades filiales de la UNOCANC.²¹

Los resultados destacados en la valoración final fueron sumamente críticos en relación con los logros, más teniendo en cuenta que aludían a las evidencias constatables después de veinte años de presencia de CESA en Toacazo: el informe elaborado bajo los auspicios de Agro Acción Alemana señaló acertadamente los límites de la

20 “La penetración de la tecnología moderna fue devastadora para los suelos de pendiente alta o moderada. La facilidad con la que los campesinos se adaptaron al empleo de energía mecánica contrastó con las dificultades que han tenido los programas de forestación y reforestación para avanzar y consolidarse, debido a la escasez de tierras y a la falta de tradición sobre sistemas de producción forestal y provisión de productos forestales para construcción y uso doméstico” (Sylva, 1991: 88). Habrá que esperar hasta la segunda mitad de los noventa para que entre con una cierta fuerza el enfoque del manejo sostenible (particularmente de páramos... o de lo que quedaba de ellos) de la mano de ONG como Heifer.

21 Dados los problemas de la zona (mala calidad de la tierra, erosión, producción y comercialización deficiente), el Proyecto planteaba los siguientes apoyos: gestión integral de los recursos naturales (desde su conservación —forestación, terrazas y demás—, hasta la mecanización y la experimentación/demostración agrícolas); asesoramiento técnico agropecuario (poniendo énfasis en la reactivación de tecnologías tradicionales y en el mejoramiento genético de ovinos); así como apoyos a otras actividades productivas (tales como las de carácter artesanal relacionadas con la lana, la producción y tratamiento de quinua, el procesamiento agroindustrial de la papa —harinas, fideos—, el establecimiento de microempresas rurales, y el análisis de las posibilidades reales de riego para el área) (CESA y UNOCANC, 1987: 44-45).

UNOCANC como organización capaz de sobrevivir por sus propios medios a una eventual ausencia de agencias de desarrollo;²² la incapacidad institucional de vencer las condiciones desventajosas de inserción de los campesinos en los mercados; las incertidumbres que planteaba, de cara al futuro, el énfasis desmedido que el Proyecto había mostrado en fomentar el monocultivo de variedades altamente productivas de patatas (sobre todo y de manera remarcable en la zona media);²³ así como los riesgos derivados de un proceso de mecanización que no hizo más que apuntalar el predominio (y el beneficio prioritario) de las unidades vinculadas con el núcleo duro de Planchaloma, el semillero de los nuevos intelectuales orgánicos a que me referí en el capítulo anterior:

En vista del fomento unilateral de un grupo poblacional relativamente bien acomodado a través de este apoyo, del aprovechamiento relativamente bajo de los tractores que pertenecen al proyecto y no por último en base de las subvenciones necesarias permanentemente, se le puede recomendar a la entidad responsable [...] suspender esta medida de apoyo (Ege, 1992: 3).²⁴

Entre el compromiso campesinista y el modelo farmer

Vale la pena reflexionar, llegados a este punto, sobre la naturaleza de la intervención de CESA en las tierras altas de Toacazo. Como comenté más arriba, en cierto sentido es como si el quehacer de la institución hubiera transitado desde unos posicionamientos próximos a los de la militancia de izquierda y, por ello, deudores

-
- 22 Recuérdese la crisis en que se vio sumida la OSG tras la retirada de CESA en 1992. Ver capítulo 5, “El desembarco de las agencias de desarrollo”.
- 23 Como recordaría Francisco Román mucho tiempo después, “los primeros años los rendimientos en el cultivo de papas fueron exorbitantes, la productividad llegó hasta cincuenta quintales por uno de semilla. Esto produjo los primeros indígenas ricos de la zona” (citado en Viera, 2009: 42).
- 24 Ahí va la explicación detallada que dio el evaluador Willi Ege: “En el período entre enero de 1988 y junio de 1992 los dos tractores [propiedad del Proyecto] hicieron en total 8 269 horas de trabajo. El promedio de unas 3 horas y 10 minutos por tractor/día que resulta de este total, permite [extraer] la conclusión [de] que los tractores no fueron utilizados suficientemente [...]. El precio por hora solicitado por los campesinos favorecidos para la utilización del tractor, siempre fue más bajo que el precio pedido por los propietarios privados de tractores. Ya que por este motivo un funcionamiento con cobertura de los costos no era posible, durante toda la duración del proyecto CESA tenía que subvencionar (a través de fondos propios) la utilización de tractores [...]. Del total de 8 269 horas de funcionamiento, recaen 4 384 horas (quiere decir un 53%) a las cooperativas Cotopilaló, Vicente León y San Carlos. En estas tres cooperativas viven 131 familias, es decir solamente 13,3% de la región total del proyecto. Entonces se puede constatar que *la utilidad de la mecanización agrícola (subvencionada por CESA) en gran parte se dirige a comunidades o familias que, de todos modos, ya son privilegiados por el volumen y la calidad de su propiedad de tierra*” (1992: 33-34) (la cursiva es mía).

de un proyecto político de carácter transformador, a otros mucho más tecnocráticos y centrados en la difusión de la revolución verde y en sentar las bases para una eficiente articulación del campesinado local a los mercados. La primera estaría representada en la labor desempeñada por Germán León como promotor de CESA en la zona, entre 1977 y 1984, y la segunda por el devenir de las últimas fases del Proyecto TTP, aunque ya en sus primeros diseños programáticos estuviera implícita la idea de una vía *farmer* de desarrollo capitalista ni homogénea ni incluyente de todos los sectores teóricamente beneficiarios del mismo.

Germán León se instaló en la antigua casa hacienda de Cotopilaló y, en poco tiempo, tomó conciencia de la situación subordinada del campesinado indígena respecto a la población blanco-mestiza de Toacazo, de los mecanismos de dominación ideológica que continuaba ejerciendo el patrón Tapia y del rol ultraconservador que jugaba el párroco Velastegui como garante espiritual del viejo orden terrateniente que se resistía a caer. Desde el primer momento orientó su quehacer con los exprecaristas de Cotopilaló en la dirección de concienciarlos de la necesidad de consolidar una organización sólida con qué enfrentar los poderes fácticos de la parroquia y, a la vez, de reorientar la nueva cooperativa hacia una forma de gestión que, lejos de visiones idealistas del comunitarismo indígena, estuvieran en consonancia con las tendencias individualizadoras constatables sobre el terreno. En relación con la primera línea de trabajo, hay que reconocer que fue el paulatino empoderamiento de los antiguos huasipungueros y la orientación de las primeras intervenciones de CESA *in situ* (apertura de caminos, obras de riego y, muy especialmente, la creación del poblado de Planchaloma) quienes aceleraron la decadencia de Toacazo como centro económico, ceremonial y simbólico de la parroquia, precipitando, de paso, la crisis de quienes se lucraban al amparo del régimen gamonal.

Joven ingeniero recién graduado, Germán León aprendió en la vieja casa hacienda de Cotopilaló lo alargados y sutiles que eran los hilos de la explotación de la población indígena de las tierras altas por parte de los sectores blanco-mestizos alineados con el cura y el terrateniente de Toacazo. León comprobó cómo el párroco tenía señalados determinados días para que “la indiada” —como se le decía coloquialmente en el pueblo— bajara a confesarse a la parroquia en procesión, cada quien agarrando un cuy, unos huevos, unas papas, algún que otro borrego: era menester brindar a mamita Virgen —se les decía en el confesionario—, porque si no podrían no cosechar ni producir nada al año siguiente... También vio cómo cura y sacristán extorsionaban a los indios cuando acudían al cementerio, por Fiesta de Finados, so pretexto de que las plegarias con música de acordeón tienen una tarifa y sin música otra más modesta, pero que de igual manera hay que satisfacer; para mayor gloria de taita Dios que está en los cielos... León aprendió, se indignó y empezó a tratar de cambiar las cosas desde la proximidad que le brindaba su condición de promotor de CESA encargado de organizar a los exhuasipungueros de una joven

cooperativa que no terminaba de arrancar... Ni corto ni perezoso, León replicó una suerte de socio-drama religioso allá arriba, al pie del páramo, lanzando sermones incendiarios y haciendo comulgar a hombres y mujeres con galletas. Hablaba del cura, del patrón, del Estado, de los grupos de poder. Decía que el tiempo de los gamonales había pasado, que era hora ya de que la organización campesina comenzara a labrar un futuro mejor para los guaguas, que no era cosa de criticar por criticar la religión, pero sí esa práctica de la religión en connivencia interesada con el patrón... Abí Germán León se transformó en el Tigre de Toacazo, ese demonio que los indios alimentaban en las alturas y que, a decir del cura, era el culpable de que ya nadie bajara al pueblo con cuyes, buevos, papas ni borregos...²⁵

La intención de CESA en aquellos primeros tiempos era la de tratar de viabilizar la cooperativa para que pudieran los campesinos ir amortizando la deuda contraída tras la compra de la hacienda y, a tal fin, pretendía apostar por el mantenimiento de la unidad de explotación so pretexto de garantizar la obtención de economías de escala. León percibió enseguida que las dinámicas de las unidades de producción se encaminaban en otra dirección, que cada quién quería gestionar su lote de tierra y que, por lo tanto, había que adaptar el proyecto a la realidad y no al revés:

La teoría dice que comunitariamente se produce más, que se tiene acceso al crédito, que por aquí, que por allá y que los beneficios también van a ser iguales para todos, pero en la práctica yo me daba cuenta de que era todo lo contrario, que no había interés de la gente para producir comunitariamente en los términos que se venía manejando. Y lo que hicimos fue una gran asamblea, bueno pues dije: “¿Cómo piensan ustedes que se puede organizar la producción?” [...]. Entonces dijeron: “Nosotros nos queremos organizar en unidades productivas”. Ya, pues. De ahí inicialmente formamos grupos de cinco familias y decidimos repartirnos el 50% de la propiedad y el otro 50% dejarle comunitariamente. Entonces ahí sí fuimos al banco y sacamos el préstamo, pusieron de garantía la propiedad, también CESA tenía fondos puestos en el Banco de Fomento, Fondo Conjunto que se llamaba, y sacamos el préstamo. Logramos también un crédito para insumos y, bueno ya estaba más fácil en grupos trabajar... Logramos también un crédito para insumos (de unos tres millones de sucres). Y ahí no les pareció mucho porque a cada grupo ya le resultó menos. De igual manera pedimos gran cantidad de fertilizantes, y vinieron

25 Relato elaborado a partir de los testimonios de Miguel Gaibor (Quito, 19/09/2003), Germán León (Quito, 15/07/2010), José María Iza, Guillermo Velásque y Dioselinda Iza (Proyecto Escribiendo la Historia de la UNOCANC, julio 2007). La animadversión de las fuerzas vivas le valió a León sufrir un atentado en carne propia cuando, tras haberse instalado ya en el pueblo (inicios de los años ochenta), alguien rompió el cerramiento de la oficina de CESA y entró buscándole pistola en mano. Ventajosamente para el promotor, la casa estaba vacía y el altercado no volvió a repetirse.

como dos o tres camiones [...]. [Además], ese año la institución [CESA] tenía mecanización agrícola, así que prestábamos tractor a precios cómodos y a veces a crédito. Sembramos papas, todos los grupos emocionados, unidos, sacaron papas y produjeron bastante... Sacaron todos al mercado, hasta hicieron bajar el precio de las papas en Cotopaxi. En total tuvieron una buena rentabilidad. Entonces muchos se compraron carros, tractores, etc. De esta forma logramos pagar las deudas que tenían, porque cada grupo aportaba para el pago de las cuotas vencidas.²⁶

En esta experiencia se encuentra el fundamento de la instrumentalización de la forma de cooperativa como estrategia para consolidar una pequeña red de explotaciones familiares independientes, pero con facilidades para acceder al crédito y, como planteamos en su momento, blindadas estatutariamente de una eventual fragmentación de los lotes.²⁷ A ese modelo responde Cotopilaló, Vicente León y San Carlos. La lógica subyacente tiene que ver, por supuesto, con las tendencias constatables en el área andina hacia la individualización en la toma de decisiones de las unidades campesinas en estrecha relación con su grado de vinculación mercantil y la presión sobre la tierra en un escenario en el que esta deviene un recurso cada vez más escaso (Cotlear, 1988; Martínez Valle, 2002). Resulta un caso particularmente interesante, además, en la medida en que permite visualizar cómo fue concretándose sobre el terreno un modelo *farmer* de desarrollo en aquellos escenarios de las tierras altas en que se daban las condiciones para ensayarlo. Vale la pena subrayar que, desde el primer momento, CESA fue perfectamente consciente de que las unidades productivas de la exhacienda Cotopilaló disponían de unas condiciones excepcionales, en cualquier caso mucho mejores que las de sus vecinos, y que esa circunstancia posibilitaba la experimentación de una vía campesina de modernización capitalista siguiendo, eso sí, los preceptos del entonces dominante paradigma de la revolución verde. Si en un informe de 1981 se señalaba con claridad que la cooperativa Cotopilaló “es la que mejor funciona y tal vez donde se encuentran los campesinos más privilegiados de la parroquia”, siendo “modelo de las otras del lugar” (CESA y UNOCANC, 1987: 139), en el momento de la salida de CESA en 1992 se afirmaba taxativamente —y yo añadiría que una cierta dosis de orgullo— que:

[...] aunque la Reforma Agraria ejecutada por CESA tuvo un relativo grado de éxito, actualmente se puede constatar una marcada diferenciación económica entre los socios de las cooperativas Cotopilaló y Vicente León y los comuneros de las restantes comunidades que conforman el área. Diferenciación que tiene como causa fundamental el acceso diferencial a la tierra y, como causas secundarias, el acceso a los servicios prestados por CESA, la cercanía al mercado regional de Saquisilí y la presencia de otras

26 Entrevista a Germán León en Quito (15/07/2010).

27 Ver capítulo 3, “La cara campesinista de la Iglesia: Cotopilaló”.

instituciones de desarrollo. Actualmente, las mencionadas dos cooperativas están inmersas en un proceso de acumulación de capital que inevitablemente está desembocando en una fase de transformación de los actores sociales: *son pequeños empresarios capitalistas y, a futuro, constituirán una pequeña burguesía rural* (la cursiva es mía) (CESA, 1992: 69).

En esta cita queda expresada, sin tapujo alguno, la verdadera y explícita naturaleza del modelo CESA en Toacazo: la constitución de una burguesía campesina floreciente, una red de unidades familiares capitalizadas destinada a tirar de las riendas de la organización, por supuesto, y sobre la cual se concentró el grueso de las inversiones productivas y de capacitación. Aquellas otras comunidades ubicadas en la periferia de este selecto núcleo de cooperativas se vieron agraciadas, en el mejor de los casos, con intervenciones meramente asistenciales o de corte coyuntural o estacional, y eso a través de la mediación de la UNOCANC. El área de Cotopilaló, Razuyacu, Vicente León y San Carlos (correspondiente a los tipos 1, 2 y 3 de la tabla 1)²⁸ es, a trazo grueso, la zona donde más se empleó a fondo la agencia en la transferencia de tecnología y en consolidar un modelo de vinculación al mercado a través de la especialización en la producción de papas mejoradas y, en menor medida, de pastizales. Fueron los campesinos de allí, además, los más beneficiados de la línea de crédito que CESA tenía pactada con el Banco de Fomento. Con respecto a la mecanización, uno de los componentes fundamentales del Proyecto en aquella época, se entregaron tractores a las cooperativas subsidiados al 100 %, reforzando la generalización de relaciones de dependencia arriba-abajo dado que, desde entonces, los de las comunas periféricas han tenido que recurrir a esa zona media a solicitar (y pagar) los servicios de tractoreo. En las tierras más altas, por el contrario, la mala calidad de las parcelas, la dimensión de los lotes, las fuertes pendientes y la escasa disponibilidad de agua, hicieron que los efectos de la actuación de CESA fueran muy distintos.²⁹ Dicho con otras palabras: ante escenarios y condiciones diferentes, diferentes resultados en la aplicación de un mismo modelo (o al menos concebido sobre el papel con similares componentes) de desarrollo rural.

28 La tabla 1 ha sido extraída del capítulo 5 del libro original (N del E).

29 Entrevista a Ramiro Moncayo en Quito (23/10/2003).

Tipo	Asentamientos	Producción	Observaciones
1 (zona media) -150 familias -10-15 ha/familia	Cotopilaló Vicente León San Francisco	Importantes superficies de tierra plana, buena parte de ella con riego. Actividad agropecuaria orientada al mercado: papa y zanahoria, vacas de leche (4-5). Cada familia tenía en promedio 10 ovinos mejorados, chanchos (4), gallinas (6), cuyes (20).	Cada organización tenía un tractor agrícola, amén de los campesinos particulares que poseían el suyo. Prestaban servicios como tractoristas a las comunidades altas.
2 (zona media-alta) -60 familias -13 ha/familia	San Carlos	Tierras planas, arenosas y con acceso limitado al riego. Siembra de cebada y cebolla y pastoreo de borregos. Animales: 25 borregos, vacas (1), cuyes (15), gallinas (4).	Migraban principalmente los jóvenes para dedicarse a pequeños negocios de productos 'chatarra' en la ciudad de Quito y como lustrabotas.
3 (zona media/media-alta) -250 familias -3 ha/familia	Razuyacu Chiguanto Corazón de Jesús San Ignacio Wintza Planchaloma	Suelos buenos. Cultivos de papa, haba, melloco, zanahoria, cebolla de rama orientados al mercado. Animales: 2 vacas de leche (venta), 5 borregos, 15 cuyes, 3 chanchos, 5 conejos y 4 gallinas.	Migración inferior al 10% de la población, sin embargo, la población joven (hombres y mujeres) se empleaban en la hacienda de Razuyacu y en las floricultoras instaladas en los alrededores del área.
4 (zona media/media-alta) -150 familias -10-15 ha/familia	San Bartolo Moya Grande Moya San Agustín	Producción principal: papa para el mercado, le seguían mellocos y habas. Animales: 3 vacas de leche (para venta), 20 borregos, 10 cuyes, 5 chanchos, 3 gallinas, para ahorro y autoconsumo.	Los ingresos provenían de la actividad agropecuaria.
5 (zona media/media-alta) -160 familias -10-13 ha/familia	Manchacazo Quillusillín Chisulchi Grande Chisulchi Chico Yanahurquito	Sembraban con menor intensidad papas, mellocos, cebadas y chochos. Pocos animales domésticos: toretes (2), borregos (10), gallinas (3), cuyes (8).	Ingresos agropecuarios insuficientes para las economías domésticas. Migración intensa a Latacunga, Saquisilí y Quito (cargadores, venta informal de huevos).
6 (zona media) -110 familias -menos de 1 ha/familia	Quinte B. Esperanza Quinte San Antonio	Cultivos de cebolla de rama y zanahoria (venta), papa y maíz (autoconsumo). Animales menores: cuyes (10), gallinas (4), borregos (2), bovinos (1), chanchos (1).	Ingresos agrícolas insuficientes. Migración masculina del orden del 60% a Quito, Ambato, Latacunga y Baños (construcción y jardinería).

Tabla 1. Tipología de unidades campesinas en la zona UNOCANC (2000).

Fuente: el autor a partir de notas del trabajo de campo y UNOCANC, 1999: 37.

Esa diversidad de situaciones se tradujo en el establecimiento de redes clientelares (a veces a través de mecanismos como el compadrazgo) entre CESA (y otras agencias) y familias de la zona media y, a la vez, entre estas y las comunidades altas. De nuevo hay que incidir en este punto sobre el modo en que el área de Planchaloma se benefició prioritariamente de insumos como la formación.³⁰ Todo ello ha implicado, por consiguiente, que la intervención posterior de otras ONG se haya superpuesto sobre el núcleo pionero (y privilegiado) del trabajo de CESA, pues es allí donde siempre se concentró el poder local y donde se entretejía la interlocución con los agentes externos.

En su detallada investigación sobre el funcionamiento y la lógica interna de los campesinos de la UNOCANC, Amparo Eguiguren (1995) señaló cómo ese acceso desigual a los recursos estratégicos determinó la conformación de diferentes estratos socioeconómicos. Los que accedieron a la tierra, bien a través de la acción de la Reforma Agraria estatal, de la intervención de CESA o de la compra directa de predios, “tienen en promedio mayor cantidad de tierra que el resto de campesinos de la región y algunos poseen también vehículos para alquiler o para transporte de productos”. Los arrimados, hijos de exhuasipungueros que ya no tuvieron acceso a una parcela, por su parte, constituían el grueso de los que “migran a las ciudades para retornar el fin de semana”. Los jóvenes sin tierra pero “estudiados” (bachilleres y algunos universitarios) —hijos sin duda de los beneficiarios de la zona media, aunque sin patrimonio propio— estaban fuertemente ligados a los

30 Un somero recorrido por la biografía de algunos de los líderes más remarcables de la UNOCANC apunta en esta dirección. Leonidas Iza, por ejemplo, procedente de una de las familias de Cotopilaló protagonista de la reforma gestionada por CESA y posteriormente formado por la agencia desde los 15 años de edad, fue acumulando prestigio en la UNOCANC en paralelo a la viabilización mercantil de su unidad productiva. En su momento ya indicamos cómo simultaneó la Presidencia de la organización con su trabajo como tractorista de CESA, circunstancia que le acarreó más de un sinsabor en la etapa final de su mandato al frente de la OSG. Jorge Herrera, por su parte, trabajó con CESA, no como empleado directo de esa institución, sino como contraparte en todo lo que CESA hacía sobre el territorio de la UNOCANC. Eso le permitió participar en diferentes instancias y tener más oportunidades de las que tuvieron otros jóvenes indígenas: se formó en el manejo de recursos naturales y medio ambiente, especializándose en la cuestión forestal, y participó en capacitación extensiva a nivel local e internacional. A través de CESA y de CICDA —que también apoyó al colegio Chaquiñán, recuérdese— viajó a Perú, Bolivia y América Central en programas de educación y producción. Finalmente, su paso por el Chaquiñán le facilitó el acceso a la Universidad Técnica de Loja, donde se tituló. De igual manera, habría que ver cómo beneficiaron los vínculos de CESA con otros países (Perú, Bolivia, Panamá) la formación de gentes como Olmedo Iza o Remigio Sillo. Este último, sin ir más lejos, disfrutó de una beca de tres meses en 1989 para asistir a un curso del Instituto Cooperativo Interamericano en Panamá. Entrevistas realizadas a Leonidas Iza en Quito (15/11/2006), Miguel Gaibor en Quito (19/09/2003), Germán León en Quito (15/07/2010), Bolívar Rubio en Toacazo (14/07/2010), Jorge Herrera en Latacunga (02/10/2003) y Remigio Sillo en Toacazo (04/10/2003).

sucesivos grupos dirigentes de la OSG. Finalmente, los líderes de la UNOCANC, interlocutores frente al aparato del desarrollo, procedían de las comunidades y cooperativas más relacionadas con el centro de Planchaloma, o estaban “vinculados por relaciones de parentesco con alguna de las familias de estas cooperativas y comunidades”, acostumbrando a tener un nivel de instrucción “relativamente alto en relación a la zona: entre sexto grado de escuela primaria y sexto curso de colegio” (1995: 83-85). Quiero incidir en estas reflexiones de Eguiguren porque en la aceleración de los procesos de diferenciación entre las unidades productivas de las tierras altas de Toacazo, además de la transferencia del paquete tecnológico de la revolución verde, jugó un papel fundamental el acceso diferencial a la formación: como consecuencia de la intervención de las agencias de cooperación y de su inversión en talleres y seminarios de diversa índole, se fueron conformando en el área diferentes tipos de campesinos en función de su relación con el “saber” de las capacitaciones.

Franklin Ramírez (1995) explicita, en esta línea argumental, de qué manera esa jerarquía en el acceso a esos “saberes” se corresponde con la consolidación de una peculiar estructura del poder en la OSG. En la cúspide estarían los campesinos altamente capacitados, “aquéllos que iniciaron su experiencia educativa en los centros de alfabetización, en las ERPE, y que luego pasaron a ser dirigentes sea en la UNOCANC o en sus respectivas comunidades”: desde ahí se fueron relacionando con otras instituciones que les brindaron nuevas oportunidades de capacitación. Por debajo encontramos a aquellos individuos medianamente formados: los que trabajaron al amparo del aparato del desarrollo, esto es, desde las mujeres que fueron, poco a poco, organizándose, hasta quienes asistieron de manera aislada y más o menos discontinua a las diferentes capacitaciones técnicas ensayadas en la zona. Por último, los campesinos que nunca asistieron a los talleres formativos, mayoritariamente adultos y viejos sin relación con las agencias de intervención, estaban literalmente imposibilitados para ocupar cargos directivos (Ramírez, 1995: 73-74). La concentración de las capacitaciones coadyuvó, pues, concentración del poder:

El eje espacial de intervención de las instituciones de desarrollo que han trabajado en la zona es el barrio de Planchaloma [...], es decir la zona que antes pertenecía a la hacienda Cotopilaló y que ahora incluye la cooperativa del mismo nombre, San Ignacio, Wintza, los Quintes [...]. Son justamente los campesinos pertenecientes a estos sectores los que han participado mayormente en las capacitaciones. Sin embargo, la centralización o concentración a la que hemos hecho mención no responde solo a las facilidades que implica vivir cerca de las oficinas de la organización donde se dictaban los cursos, sino además a que la difusión de la realización de determinada capacitación circulaba a través de los dirigentes de la UNOCANC, y estos aparentemente aprovechaban los cursos para sí mismos o en su defecto para sus parientes cercanos. [Las capacitaciones] han generado efectos diferenciadores y centralizadores:

lo primero en cuanto a que la dicotomía dirigencia-bases se ha visto reforzada por el tipo de capacitación a la que han accedido los diferentes campesinos, los dirigentes han sido circunscritos dentro de la esfera de lo socio-organizativo, lo político, lo administrativo, mientras que el resto de campesinos se ha visto restringido a la esfera de lo técnico. Del mismo modo, el rasgo concentrador [...] responde a la tendencia general de centralización de las capacitaciones dentro de un círculo excluyente de campesinos (1995: 75-77).

La articulación exitosa de un modelo *farmer* de desarrollo rural cuyos protagonistas tuvieron acceso privilegiado a las capacitaciones de todo tipo —en cualquier caso, capacitaciones que les facilitaron su adaptación a las reglas del juego de su creciente mercantilización en un contexto general de corte neoliberal— y que tuvo su corolario en la consolidación de una plataforma organizativa (la UNOCANC) sobre la que directa o indirectamente siempre ejercieron el control, se plasma espacialmente en las figuras 2, 3 y 4. Es destacable, en primer lugar, de qué manera esas redes privilegiadas de unidades familiares capitalizadas van a constituirse, básicamente, sobre las tierras de las antiguas haciendas Razuyacu-Cotopilaló y San Carlos, justamente aquéllas que concentraban mayor porcentaje de suelos con menores limitaciones para las actividades agropecuarias (figura 2). Obsérvese también la coincidencia con los sectores del territorio más llanos y, en cualquier caso, con pendientes inferiores al 12% (figuras 3 y 4). Los planos reflejan con toda claridad, por el contrario, la situación de las comunidades conformadoras de los anillos periféricos de la UNOCANC:³¹ ubicadas a mayor altura o en pleno cerro y habitualmente con tierras de cultivo de escasa vocación agrícola, con pendientes muy pronunciadas (de más del 25% en los Chisulchis, las Moyas y Yanahurco Grande) y sometidas, en fin, a unos procesos de degradación de los suelos cuando menos inquietantes de cara al futuro más inmediato.³²

31 Los incluidos en los tipos 4, 5 y 6 de la tabla 1. Ver capítulo 5, “Unas economías campesinas altamente diferenciadas”.

32 Una observación curiosa: la clasificación que el Plan de Desarrollo Local de la UNOCANC (1999) establece entre comunidades bajas y altas (enmarcadas, respectivamente, en lo que en este trabajo denominó como zonas media y alta, en relación con el Bajío donde se ubica el pueblo de Toacazo), no suele corresponderse con las alturas reales, medidas en metros sobre el nivel del mar, de los asentamientos. Planchaloma, por ejemplo, que está como a 3 340 msnm, es el centro neurálgico de la zona media y San Francisco, prácticamente a la misma altura, pero ubicada en uno de los valles que van hacia la Costa (en la vía a Sigchos), es situada “arriba” en el imaginario colectivo local. Más bien lo de “arriba” y “abajo” tiene que ver con la contraposición entre las tierras planas (las integrantes de la llanura de Wintza y los alrededores de Planchaloma) y las encaramadas sobre los filos de la cordillera (las Moyas, los Chisulchis) o en los valles altoandinos (Yanahurco, Quillusillín). Dichas clasificaciones *emic* coinciden, *mutatis mutandis* con la realidad que reflejan los mapas de suelos, alturas y pendientes (figuras 2, 3, 4).

Tal correlación entre mejores tierras (y con acceso al riego) y redes de poder no parece casual ni gratuita sino que es, como tratamos de argumentar, la consecuencia lógica de la implementación sobre el terreno del modelo de CESA con epicentro en Planchaloma. La parte gruesa de las inversiones fueron a parar allí, quedando para el resto del territorio las intervenciones en vías de comunicación y las obras asistenciales prestadoras de servicios básicos como agua entubada o la construcción esporádica de escuelas o casas comunales. Mientras que entre los comuneros de las zonas más periféricas de la UNOCANC se reprocha a CESA que su labor se limitara a abrir caminos y a roturar los páramos,³³ la mecanización floreció en las cooperativas vecinas a Planchaloma. Una situación que, por lo demás, no hizo más que allanar el camino para consolidar las relaciones de dependencia entre unos —los de arriba— que pasaron a depender de otros —los de la zona media— para poder cubrir las necesidades de tractoreo que se establecieron una vez que se vieron inmersos en la lógica del paquete de la revolución verde, aún en condiciones desventajosas y marginales.³⁴ Las quejas y lamentos de los comuneros de esos sectores son recurrentes y conspicuos.³⁵

La disparidad de situaciones a lo largo del territorio es bien evidente y adquiere tintes dramáticos en el caso de algunas de las comunidades de la zona alta, donde a los problemas derivados de la erosión eólica —brutalmente acelerada desde el inicio de la roturación de los páramos allá por los años ochenta— hay que añadir el agotamiento de los acuíferos, el alejamiento relativo de las principales vías de

33 Testimonio de Andrés Castro (las Moyas), Proyecto Escribiendo la Historia de la UNOCANC, (julio 2007).

34 Según Jorge Herrera, hacia el año 2003 debían haber en San Carlos unos diez tractores particulares y uno de la cooperativa; en Cotopilaló, dos privados y uno cooperativo; en Vicente León, uno y uno, respectivamente, lo mismo que en Razuyacu Corazón. Rafael Muenala (ingeniero de CESA) añade un dato remarcable: que el incremento de la mecanización en San Carlos fue facilitado por el hecho de que algunos huasipungueros trabajaron como tractoristas asalariados antes de la Reforma Agraria. De esa “tradición de tractoristas”, pues, nace la actual especialización de los socios de San Carlos como suministradores de esos servicios a las comunas más altas. Otros testimonios, como en el de Manuel Velásque, avalan, en parte, esta tesis, al reconocer que Olmedo Tapia —el último patrón de San Carlos— ya disponía de tres tractores en la hacienda, aunque al principio contrataba tractoristas externos para su manejo. Entrevistas a Herrera y Muenala en Saquisilí (10/12/2003) y a Velásque en San Carlos (16/10/2003).

35 Tal es el caso de Chisulchi Grande, una de las comunas en peor situación de todo el territorio de la UNOCANC y dependiente estructural del alquiler de horas de tractor de Cotopilaló o San Carlos. Los responsables del Cabildo de la comunidad mostraban una actitud muy crítica en 2003 cuando valoraban el paso de las agencias de desarrollo por la zona debido al abandono a que tenían condenada a su comunidad. Como la comuna tiene personería jurídica, me comentaban algunos comuneros que ellos mismos hacían sus propias solicitudes a los agentes externos (PRODEPINE incluido), peticiones que eran siempre desestimadas de no contar con el aval explícito de la UNOCANC. Entrevistas con Alberto Guamán en Chisulchi Grande (05/08/2003 y 17/10/2003), así como conversaciones informales mantenidas con distintos campesinos de Chisulchi en los meses de julio de 2003 y 2004.

comunicación y la imposibilidad real, en fin, de insertarse exitosamente como productores viables, ni siquiera en los mercados locales y regionales. Por otra parte, conviene no olvidar que la relación de esas comunidades con las agencias de desarrollo siempre estuvo mediada por la dirigencia de la UNOCANC, es decir, por quienes han controlado los hilos del poder desde la zona media. Este es un hecho que ha ido consolidando una serie de filias y fobias entre arriba y abajo, entre quienes han mantenido unas relaciones clientelares para con la organización y quienes han perpetuado un estado de cosas tenso y de conflicto latente, con puntuales estallidos en función de las circunstancias.

Eso explica la paradójica situación de algunos sectores como los Chisulchis y las Moyas, en condiciones de extrema marginalidad, donde es francamente difícil llegar a imaginar alternativas para unas economías campesinas altamente depauperadas y donde, en parte por ello, las intervenciones del aparato del desarrollo se han limitado a las mencionadas medidas paliativas o asistenciales. Tradicionalmente, sin embargo, esas comunidades se han mantenido fieles a los llamados de la UNOCANC, constituyendo parte importante de la población de las tierras altas, movilizadas en cuantos levantamientos, movilizaciones y marchas ha participado la OSG. En otros sectores, como el del eje San Bartolo-Quillusillín, la situación es bien diferente, puesto que los líderes comunitarios han mantenido posicionamientos críticos en relación con el manejo del poder local desde Planchaloma, participando de manera selectiva en las actividades convocadas por la UNOCANC y estando atentos, en cualquier caso, ante cualquier eventualidad que les permitiera disponer de cauces de audibilidad directos y alternativos. Por eso comenté, en su momento, que la fortaleza de la UNOCANC, como plataforma con alto poder de convocatoria, dependió siempre, en última instancia, de ostentar el monopolio de la representatividad de sus comunas y cooperativas filiales ante el entramado institucional del desarrollo. En la medida en que los respectivos gobiernos de turno fueron jugando la carta del establecimiento de relaciones directas con determinadas organizaciones de base —justamente con la intención de erosionar el poder de las OSG— o que el fortalecimiento de las juntas parroquiales vaya consolidando su papel como instancia de representación y mediación ante los demás poderes del Estado y los agentes externos, el rol de la UNOCANC como referente ineludible (y único) de las tierras altas de Toacazo irá eclipsando.

Un ejemplo fehaciente de esto se dio en el año 2003, a raíz de la ruptura del movimiento indígena con el régimen del presidente Lucio Gutiérrez y de la consiguiente salida del Gobierno nacional de los ministros de Pachakutik. Es muy interesante analizar cómo se concretó dicha ruptura en los laberínticos senderos de la política local, en los micropoderes que se ejercen a nivel de las parroquias. Resulta que, en el caso de Toacazo, tras la quiebra de la alianza en el mes de agosto, un sector de los de arriba (comunidades de Quillusillín, San Bartolo, Manchacazo, Yanahurquito Chico y una parte de San Carlos) se pronunció explícitamente a favor de Gutiérrez (participando, en algunos casos, en marchas de adhesión al régimen y

todo) y, por ello, implícitamente opuestos a la UNOCANC, alineada con la postura oficial de la CONAIE y Pachakutik. Ello respondía, naturalmente, al afloramiento de conflictos y agravios que hunden sus raíces muy atrás en el tiempo. En efecto, cabe pensar que, ante el debilitamiento de las estructuras de poder hegemónicas en la UNOCANC, los de arriba aprovecharan la brecha abierta e intentarían maximizar las escasas (pero novedosas) posibilidades que la nueva coyuntura les brindaba. El Gobierno nacional jugó sus cartas con mucha inteligencia, nombrando como teniente político de Toacazo a Gonzalo Ugsha, de la comuna Quillusillín, y contribuyendo eficazmente a fragmentar el poder parroquial de la UNOCANC, bajo cuyo control estaba entonces la Junta Parroquial.³⁶

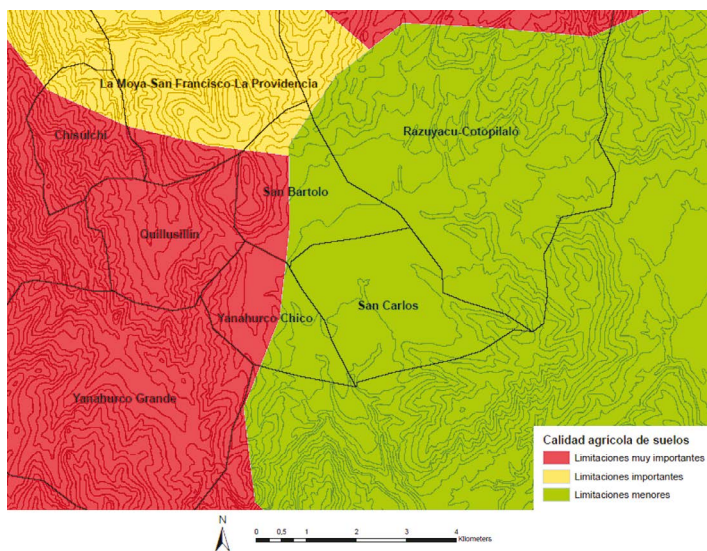


Figura 2. Calidad agrícola de los suelos de las tierras altas de Toacazo tomando como base la ubicación aproximada de las antiguas haciendas.

Fuente: el autor a partir de los datos del Instituto Cartográfico Militar.

36 Ugsha permaneció en el cargo hasta junio de 2004. Su salida de la Tenencia Política se debió, al parecer, a una negociación entre bambalinas al más alto nivel, tal vez por petición desde la mismísima CONAIE ante el Ministro de Gobierno a condición de que el cargo recayera en un mestizo del pueblo. De todos modos, el episodio de Ugsha —y lo que él representaba— merece una reflexión aparte. Perteneciente a una familia de campesinos acomodados de Quillusillín (con un patrimonio cercano a las cuarenta hectáreas de tierra plana), su desencuentro con las élites de Planchaloma quizás provenga del hecho de que, a pesar justamente de pertenecer a las élites campesinas de la zona alta, vio cómo la mayor parte de las inversiones derivadas de los proyectos de desarrollo no pasaban de las grandes pampas de la zona media. Entrevistas a Gonzalo Ugsha en Quillusillín (01/07/2004) y a Dioselinda Iza en Planchaloma (29/06/2004).

Fin de la microverticalidad y asalto al páramo

[De] lo que yo me acuerdo en la zona existía bastantes árboles, en especial de Wintza para arriba, existía paja, mortiño, existían bastantes árboles, como Pumamaqui, todo eso. En la zona de abajo existía bastante siembra de cebada, hartísima cebada, habas, chochos, también sembraban papas, pero no ponían químicos, desde que yo me acuerdo, sembraban solo con abono de animal [...]. Después fue incorporando [la química], cuando llegó CESA, para ayudar con experimentos trajo la [papa] Super-chola, trajo la Gabriela, la Esperanza... Entonces ahí pusieron químicos y empezó a producir bastante, en vista de eso, como ya dividió la Cotopilaló, tenían más terreno entonces, empezaron a sembrar bastante, y bastantes hectáreas de papas, dejando ya, poco a poco, la cebada, las habas y la quinua, ya sembraban más papas que habas... En relación a la producción agrícola, el melloco fue un producto de la zona y ha desaparecido actualmente; se sembraban también bastantes ocas, mashua, melloco, el melloco no necesitaba mucho abono, hasta ahora mismo no se ha sembrado con abono, pero ha ido desapareciendo, yo pienso [que] por dos cosas: porque [...] el más que trabaja, que sabe coger mellocos avanza cinco quintales, en cambio papas se avanza como unos treinta... [Además] bajó de una vez el precio y de ahí fueron dejando, dejando el cultivo y sembrando más pasto y haciendo la ganadería... En relación a la alimentación, [...] antes lo que más comíamos en la zona era un cocinado de papas, habas, mashua, ocas, tostado cocinado y tierno mezclando así, y también a veces ponían zanahoria blanca, papas, casi la mayoría por lo menos dos veces a la semana, y con tostado de maíz, ají, y luego asimismo colada de máchica dulce, también hacían sopa, arroz de cebada, morocho, colada de maíz, cauca y hacían colada de máchica... Lo que me acuerdo es también que hacían este mezclado de harina de arveja con lenteja, hacían moler [...] o bien molían en la casa, o bajaban a hacer moler en Saquisilí... Ahora comen arroz, más que todo cuando ya salió la televisión eso incorporó, dañó totalmente la alimentación. Hoy la mayoría están alimentando de fideo, de tallarín, de arroz de seco, y dejando las harinas, pero hemos hecho varias reflexiones en las comunidades para volver a consumir lo que era nuestro, lo que realmente era alimento...³⁷

En el capítulo 3 insistí en la idea de que, con frecuencia, las primeras etapas de la lucha por la tierra vinieron espoloadas por la respuesta de los campesinos precaristas a determinados intentos de los patrones por imponer un nuevo tipo de relaciones de producción asociadas, directa o indirectamente, a la técnica “moderna” y vulneradoras, por ello, de las reglas del juego en que se sustentaba la economía moral hacendataria. Hubo que esperar hasta bien entrada la década de los setenta

37 Testimonio de Dioselinda Iza, Proyecto Escribiendo la Historia de la UNOCANC, (julio 2007).

para que, de la mano de CESA, comenzara a penetrar con fuerza en las economías campesinas el paquete tecnológico de la revolución verde, partiendo de Cotopilaló y difundándose después por todas las comunidades y cooperativas de las tierras altas de Toacazo. Dicha difusión se tradujo en la paulatina desaparición de la rotación, la asociación de cultivos y la calendarización de las labores agrícolas en función de las fases de la luna y su sustitución por el uso de tecnología mecánica para la preparación de los suelos, la utilización masiva de fertilizantes, fungicidas e insecticidas y la especialización productiva en aras de la inserción a los mercados (CESA, 1989: 63-64). Un cambio trascendental que significó, además, el final definitivo de lo que quedaba —y aún era importante en el tiempo de las haciendas— de la lógica de la microverticalidad, la pérdida de biodiversidad en las explotaciones (y su corolario más frecuente: la pauperización de la dieta de los sectores más periféricos), y la expansión de la frontera agrícola hacia arriba (fruto de la presión de los arrimados sobre la tierra) en detrimento de los páramos y bosques nativos.



Figura 5. La degradación de los páramos de Yanahurco³⁸.

La persistencia de la lógica de complementar la producción procedente del máximo número de pisos ecológicos es un hecho en lo que hoy es el territorio de Toacazo desde antes del incario y, en la etapa colonial, durante los siglos en que los caciques y curacas locales lograron impedir la composición masiva de haciendas, al menos hasta los primeros años del XVIII según la detallada investigación de Quishpe Bolaños (1999). Después, como en otras regiones del callejón interandino,

38 Consecuencias visibles de la ocupación y la sobreexplotación del páramo. En la fotografía, tomada en el sector de Yanahurco Grande, son bien perceptibles los procesos de erosión y desertización.

es plausible pensar que la población precarista debió replicar a pequeña escala, superpuesta y en parte subordinada al dominio hacendatario, esa lógica de la microverticalidad a lo largo de los largos siglos de poder de los señores de la tierra. Es difícil entender si no la viabilidad de los asentamientos permanentes en las partes más altas, literalmente al filo de la cordillera occidental, si no es pensando en un tiempo en el que la exigua densidad de población y la complementariedad de los productos que subían y bajaban por ambos lados de las montañas —desde el subtropical hasta los valles interandinos cercanos a Latacunga—, sólidamente anclados a redes de parentesco y compadrazgo, facilitaban la reproducción de esas unidades de producción. Con la modernización inducida por CESA y la conversión de las explotaciones de la zona media en *farmers* especializados en la producción de papas y leche para el mercado, la lógica de la complementariedad ecológica se rompió para siempre. En la medida, además, en que las zonas más altas aparecían como antieconómicas y no rentables desde esos mismos parámetros modernizadores, y dada la falta de expectativas de las siguientes generaciones en lo que al acceso de más y mejores tierras se refiere, el asalto a los páramos, el avance de la desertización y la pauperización creciente de esas comunidades conformaron el cuadro más frecuente, dramático y recurrente de las últimas décadas.³⁹

Hasta el momento, disponemos de dos trabajos que se han centrado en analizar y cuantificar el retroceso de las áreas de páramo en lo que actualmente constituye la zona de la UNOCANC (Arellano y Chamorro, 2007; Barragán y Valdez, 2008).⁴⁰ El páramo es, de hecho, un ecosistema sumamente frágil de cuya conservación depende, entre otras cosas, la regulación y la permanencia de los acuíferos de todos los agroecosistemas ubicados en los pisos más bajos de las respectivas microcuencas que este corona.⁴¹ En su estudio sobre las transformaciones acaecidas

39 Es el caso, por ejemplo, de las comunidades surgidas a partir de la disolución de la antigua hacienda Chisulchi, que pasaron de 9 lotes de huasipungo en 1965 a 43 unidades campesinas censadas en 1993. Ver capítulo 3, “La mediación del IERAC en la entrega de huasipungos”.

40 El primero centra su atención en el cantón Saquisilí y el segundo en el área que abarca desde la llanura de Wintza hasta Yanahurco, a caballo entre Toacazo y Saquisilí.

41 A grandes rasgos, el páramo es un ecosistema tropical de montaña que se desarrolla por encima del área del bosque y que llega hasta las nieves perpetuas, en el caso ecuatoriano entre los 3 500 metros de altura y los límites marcados por la roca y el hielo, de 4 500 metros para arriba. En los Andes, los páramos se encuentran desde la cordillera de Mérida (Venezuela), atravesando las cadenas montañosas de Colombia y Ecuador, hasta la depresión de Huancabamba en Perú. El páramo ha sido reconocido por sus importantes funciones ecológicas y por los servicios ambientales que brinda: la regulación del ciclo hidrológico, el almacenamiento de carbono atmosférico y su posición como corredor biológico para diversas especies de flora y fauna, entre otros. Sus suelos, además, poseen características propias, formando “asociaciones complejas entre materia orgánica, minerales y agua, propiciadas por [su] capilaridad [...], lo que determina un régimen húmedo de los suelos y una alta cantidad de materia orgánica por la baja tasa de descomposición debido a las bajas temperaturas” (Barragán y Valdez, 2008: 121). Ver también “¿Qué son los páramos?”, en <http://www.paramo.org/content/>

sobre la llanura de Wintza desde la Reforma Agraria hasta la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, Barragán y Valdez señalan cómo, de una situación de partida en la que toda la zona “estaba cubierta en su totalidad por una vegetación característica de páramo”, sin asentamientos humanos definitivos y con un uso de los suelos caracterizado por el pastoreo extensivo esporádico (2008: 122), se llegó a un punto en el que el páramo propiamente dicho quedó restringido en ese sector del territorio a las estribaciones del cerco Yanahurco, por encima de los 4 000 metros de altura, y con un carácter muy residual (2008: 130). Las razones de ese proceso hay que buscarlas en la vía de modernización agrícola ensayada tras el reparto agrario, fundamentada también en la expansión de las roturaciones hacia arriba para tratar de ganar superficie de cultivo con qué atender a las sucesivas generaciones de arrimados:

Luego de la aprobación por parte del cabildo de la petición de asignación de tierras comunales para usufructo individual, las nuevas generaciones se asentaban en los lugares de páramo y podían hacer uso de estas tierras para su beneficio, a pesar de no contar con títulos de propiedad individual. Para este entonces [años ochenta y primeros noventa] el trabajo necesario para instalar cultivos en las áreas de páramo era ya más sencillo pues existía un uso cada vez más frecuente de tractores para el arado [...]. Un alto crecimiento poblacional ha determinado un incremento en la demanda de recursos por parte de las familias campesinas. En un estado inicial la demanda de tierras para el desarrollo de la actividad agropecuaria fue satisfecha por dos mecanismos principales: la división de la propiedad original y la ampliación de la superficie cultivada hacia áreas de páramo. Actualmente estas dos estrategias están llegando a un agotamiento; por un lado el tamaño de la propiedad ha llegado a dividirse hasta superficies muy pequeñas (dos hectáreas por familia), tamaños considerados como minifundio, y por otro todas las comunas casi han agotado sus superficies de páramo, los pocos remanentes que aún existen se ubican en zonas de fuertes pendientes o poco accesibles; por lo tanto, difícilmente susceptibles de ser integradas como superficies de cultivo. Lo expuesto, conjuntamente con una aparente preocupación de las organizaciones campesinas por conservar las fuentes de agua, ha determinado, actualmente un freno del avance de la frontera agrícola hacia el páramo (2008: 129, 154).

El ritmo del asalto a los páramos se aceleró de la mano de la aplicación de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994 y la consiguiente posibilidad, ya sí, de la obtención de títulos de propiedad individual. Con la única y remarcable excepción de las partes más altas de la antigua hacienda Razuyacu-Cotopilaló, a partir de entonces se asistirá, simple y llanamente, a la virtual extinción de ese peculiar ecosistema en el resto del área de la UNOCANC, siendo convertido en su práctica totalidad en

cultivos de altura⁴² e incidiendo muy negativamente en el estado de los acuíferos.⁴³ De hecho, solo quedan páramos propiamente dichos en el sector de Cotopilaló: unas 500 hectáreas sobre las que durante los primeros años de la década del 2000 se estaba implementando un proyecto de cría de alpacas.⁴⁴

La relación con las agencias de desarrollo

El término “participación” se convirtió durante los años ochenta en otro comodín usado por muchas instituciones de desarrollo para significar la diferencia del enfoque de las ONG en relación con lo que caracterizó la gestión frecuentemente burocratizada y verticalista de los DRI públicos. Aun reconociendo la existencia de ONG que también adolecían de planteamientos excesivamente impositivos y excluyentes desde el punto de vista de la toma de decisiones, es verdad que, poco a poco, fue calando el discurso de la necesidad de implicar activamente a los destinatarios de los proyectos en su funcionamiento. La apuesta por la participación se tradujo en la práctica en la insistencia en el fortalecimiento de las organizaciones de los asociados, pues se partía de la base de que solo una sólida organización podía garantizar el éxito de las intervenciones. Lamentablemente, del dicho al hecho hay un buen trecho y, como vimos en el caso de CESA, ni todos los teóricos beneficiarios se beneficiaban por igual ni todos participaban en la misma medida,

42 Se constata, en efecto, una paulatina disminución de rubros tradicionales como oca, melloco y mashua, escasamente articulados al mercado, y la proliferación de productos de clara vocación mercantil como papas, habas y, donde ello es posible, cebolla y zanahoria.

43 Para el cantón Saquisilí, Arellano y Chamorro estiman que, solo en la década que va de 1997 a 2007, el caudal de agua del principal canal de esa zona disminuyó entre el 35 y el 45 %, lo que implica la afectación de en torno a un 50-70 % de los páramos (2007: 62). Estos autores muestran también su extrañeza por la política adoptada ahí por el PRODEPINE, “institución que puso a disposición de comuneros de las zonas altas un tractor para roturar las tierras de páramo”. Y no es que en ese momento (1998-2004) no se conocieran ya los efectos de la expansión de la frontera agrícola hacia arriba. Es más, “a pesar de que entre sus orientaciones este organismo plantea una línea de desarrollo sustentable con identidad, con el argumento de abrir nuevas zonas agrícolas para paliar la situación de pobreza de estas poblaciones, optó por este tipo de decisiones contrarias a una noción de sustentabilidad” (2007: 63). Una muestra más, en fin, de las falacias y las falencias de la particular acepción del etnodesarrollo adoptada por el *establishment* del aparato del desarrollo en la era del multiculturalismo neoliberal.

44 Con la colaboración de la Fundación Heifer Ecuador. De hecho, hubo un debate a principios de la década de 1990 en el seno de la cooperativa Cotopilaló sobre la posible parcelación de los páramos para uso individual (postura mayoritaria entre los viejos socios) o su conservación (postura mayoritaria entre los jóvenes formados en el colegio Chaquiñán y con otra visión de lo que debe ser el desarrollo). Estos últimos ganaron la partida, pero gracias al apoyo de algunos socios fuertemente vinculados a las agencias de cooperación, pues así consiguieron “el consentimiento de los dueños de las tierras de la cooperativa [los viejos] para establecer un “plan de manejo” del páramo que evite la parcelación e incluya un componente fuerte de reforestación” (Eguiguren, 1995: 108).

siendo frecuente, por el contrario, el mantenimiento de códigos de funcionamiento nada igualitarios (tanto por parte de las ONG como de las OSG contrapartes) bajo formas aparentemente horizontales y participativas. Conviene recordar en este sentido que la relación de las agencias con las organizaciones implicadas es, por definición, una relación de poder, en la medida en que se fundamenta en una transferencia de recursos entre una parte donante (la ONG) y una contraparte local receptora de la “ayuda”. Tampoco hay que olvidar que las organizaciones y familias implicadas en los proyectos no son actores pasivos, sino que traducen y se apropian a su manera de los insumos recibidos, proyectándolos y redirigiéndolos en función de su experiencia histórica acumulada y de sus expectativas e intereses, como veremos. En este sentido, una dimensión que hay que tener presente es el carácter fuertemente imprevisible de muchas de las consecuencias desatadas por la puesta en funcionamiento sobre el terreno —sobre un terreno concreto y específico— de una iniciativa particular en materia de desarrollo. Franklin Ramírez ya insistió en su momento, justamente a tenor del caso de la UNOCANC, en la importancia de tomar en consideración, desde una perspectiva analítica, los efectos no programados de las intervenciones; del cúmulo de consecuencias no previstas ni anticipadas que han surgido de la implementación de todo tipo de proyectos de desarrollo:

En el momento en que una intervención es ejecutada, la interacción que tiene lugar entre los actores externos y sus anfitriones, la modifica sustancialmente en relación a su formulación inicial. Es decir que al ser llevadas a la práctica, muchas de las acciones del proyecto son remodeladas, o acondicionadas por los diferentes actores que interactúan durante el proceso de intervención (2002: 111).

Examinando con la perspectiva que nos brinda el tiempo transcurrido los procesos desatados en Toacazo a instancias de la intervención de CESA, uno podría pensar que muchos de ellos ya estaban de alguna manera prefigurados en la misma filosofía desarrollista del TTP: la consolidación de una minoría de unidades familiares capitalizadas, la cimentación de una federación de segundo grado con capacidad para actuar como interlocutora ante el Estado (y, en general, ante todas las instancias del aparato del desarrollo) y, como contrapartida negativa, la condena a medidas paliativo-asistencialistas a aquellos sectores marginales desde la lógica de la modernización capitalista de las estructuras agrarias serranas. En este sentido, puede afirmarse que los campesinos de las áreas más privilegiadas por el proyecto participaron activamente y se apropiaron del mismo, aprovechando la catapulta que les supuso para posicionarse al frente de la organización y en una situación de ventaja relativa con relación a su inserción en los mercados locales y regionales como productores especializados.⁴⁵

45 Desde esta lógica, tal modelo fue exitoso, al menos, hasta la primera década del siglo XXI. Cuesta mucho encontrar otro ejemplo como el de la zona de Planchaloma en lo que a acceso, a tractores e insumos se refiere en contextos andinos predominantemente indígenas.

El modelo de CESA, de hecho, no dejaba de ser una versión de la clásica vía *farmer* dibujada en su día desde la Economía y la Sociología del Desarrollo; una traducción a una realidad local de la apuesta por las capacidades del campesinado tildado de “tradicional” para dar el salto y protagonizar un cambio cualitativo hacia la modernidad convencionalmente entendida.⁴⁶ Junto a CESA, de manera yuxtapuesta durante un buen tiempo, otras ONG ensayaron formas alternativas —menos individualistas— de colaborar con las comunas y cooperativas de la UNOCANC. El ejemplo del CEPP ofrece una experiencia muy interesante para reflexionar justamente sobre la recurrente incapacidad para calibrar algunos de los efectos de las intervenciones sobre el terreno, así como para advertir de qué manera la incompreensión de la lógica profunda de los actores sociales —o la mirada desde visiones más o menos estereotipadas de la cultura andina— pueden conducir a determinadas actuaciones por andariveles inimaginables a la hora del diseño preliminar del proyecto.

El aleccionador ejemplo del CEPP

En 1987 el CEPP empezó a operar en la zona a través del Proyecto Cotopaxi, cogestionado por esta agencia, la ONG italiana CIC (Centro Internazionale Crochevia) y la UNOCANC. Dicho proyecto tuvo una duración de cuatro años durante los cuales ejecutó diferentes acciones en apoyo de la producción agropecuaria y artesanal. De entre las actividades fomentadas por el CEPP destaca sobremanera el esfuerzo desplegado para promover y redefinir —en aras del fortalecimiento de la OSG y, de paso, para mejorar los niveles de ingresos de las familias campesinas— viejas prácticas comunitarias como el *randimbo* o *randimpac* en el ámbito de la producción de papas:

La palabra *randimbo* o *randimpac* [...] se refería a una forma tradicional de cooperación y ayuda mutua entre las familias indígenas. El *randimpac* era un acuerdo por el cual un campesino podía pedir a otro el apoyo para construir una casa o para la producción agrícola. En este último caso, podía solicitar que se le preste algo de semillas, dinero para comprar insumos o el apoyo en trabajo; la familia que recibe el apoyo tenía la obligación de entregar posteriormente bienes o servicios en reciprocidad cuando la persona que hizo el favor lo requería. Generalmente entregaban a quien brindó el apoyo una parte de la cosecha, aunque las formas del acuerdo podían ser diversas (Eguiguren, 1995: 34).

Haría falta investigar, eso sí, cuál ha sido el devenir de ese tejido de unidades capitalizadas a partir del impacto de la dolarización de la economía nacional en el año 2000.

46 Estoy pensando en autores ya clásicos como el Premio Nobel de Economía Theodor Schultz (1967, 1969) o, desde una perspectiva sociológica y antropológica, Foster (1980) o Rogers y Svenning (1979), por citar solo algunos de los más remarcables.

En 1982 un campesino de Cusubamba [Cotopaxi] sugirió durante una asamblea general emplear la relación de aparcería conocida como *randimbo* para iniciar un programa de apoyo a la producción agrícola [...]. El aparente éxito de esta iniciativa para motivar la participación de grandes grupos de campesinos inspiró a otras comunidades de la parroquia de Mulalillo en 1983, y cuatro años después a las de Toacazo (Sylva, 1991: 76).

En esta línea, y dentro del Proyecto Cotopaxi, el CEPP puso en funcionamiento, de manera consecutiva y complementaria, siembras intercomunales de papas (1987-1989) y un novedoso programa de *randimbo* (1988-1990). La finalidad era multiplicar las semillas para su germinación en silos y su posterior utilización en los cultivos comunitarios. A través del mejoramiento técnico de la producción se pretendía optimizar la posición de los productores en el mercado y, cómo no, elevar así sus condiciones de vida. Asimismo, se buscaba el fortalecimiento de la UNOCANC, logrando mayores cuotas de poder para los campesinos. Se trataba de entregar semillas, fertilizantes y asistencia técnica a las comunas, cooperativas y familias: estas últimas, por su parte, debían aportar con tierra, fuerza de trabajo y yuntas o alquiler de tractor para preparar el terreno. El vínculo entre la OSG y los hogares estaba mediatizado por cada una de las organizaciones de base implicadas, pues eran estas las instancias que debían seleccionar a las unidades de producción participantes y vigilar el cumplimiento de las normas establecidas. Tras la cosecha, la producción final se dividía entre un 55-60 % para los productores y un 40-45 % para el programa agrícola de la UNOCANC, a fin de que esta utilizase su parte en el siguiente ciclo agrícola y/o vendiera los excedentes (en caso de haberlos) en el mercado. De alguna manera, este accionar era perfectamente compatible con los procesos que ya se estaban dando en las tierras altas de Toacazo a instancias de la intervención de CESA, en la medida en que —se entendía— podía ayudar a mejorar la inserción de las explotaciones campesinas en el mercado, al garantizarles una línea de crédito permanente y la asistencia técnica necesaria para optimizar su producción:

Las ventajas de este modelo serían las siguientes: i) la familia campesina de un sector donde no operan entidades de crédito, obtiene facilidades para adquirir los insumos agrícolas, cada día más caros por la inflación y el deterioro de los términos de intercambio; ii) la semilla que la OSG provee es de buena calidad, lo que asegura aumento del rendimiento; iii) la asistencia técnica es permanente, lo cual permite introducir correctivos al paquete tecnológico utilizado por los campesinos e incluso cambiarlo; iv) la experiencia eleva el nivel de conocimientos técnicos de los beneficiarios y fortalece los vínculos con la OSG; v) las familias se vuelven más activas y colaboradoras, al menos en ciertas fases del ciclo agrícola como siembra y cosecha (Sylva, 1991: 78).

El paquete tecnológico se basaba en la revolución verde. La diferencia con CESA era que daban importancia a la recuperación de semillas tradicionales de tubérculos andinos. Pero la diferencia principal fue la organización del

trabajo mediante sistemas tradicionales como es el caso del *randimbo*, que fue utilizado para la siembra de papas. En la distribución de la cosecha también se apoyaron en costumbres ancestrales. Otra particularidad fue la implementación de mingas, las mismas que se realizaban en un ambiente de fiesta y regocijo (Viera, 2009: 47).⁴⁷

El Proyecto atendió a un volumen nada desdeñable de familias,⁴⁸ pero no funcionó como era de esperar, en buena parte por la tendencia recurrente de los campesinos a “timar” —la expresión es de Amparo Eguiguren— al CEPP reduciendo la cantidad de papas e incluyendo semillas viejas, patatas podridas, tierra y hasta desperdicios en cada quintal, “de manera que el 40 % recibido [por la UNOCANC] no corresponde realmente con el 40 % del total cosechado” (Eguiguren, 1995: 120). Todo ello con la total permisibilidad de los dirigentes⁴⁹ y ante la estupefacción más absoluta de los miembros de la ONG implicados en la supervisión de las operaciones. Hasta tal punto era así, que los resultados obtenidos del lado de la UNOCANC no permitían la continuidad del proyecto: no cubrían los costos de los aportes en insumos y, sin el apoyo de la agencia de desarrollo, era insostenible, así que cuando el CEPP se cansó, el proyecto terminó.⁵⁰

La experiencia del CEPP es muy aleccionadora sobre esos otros aspectos del mundo de los proyectos de desarrollo que, con frecuencia, quedan opacados tras el énfasis de los análisis en la “impactología”; esto es, la atención preferente por los efectos que estos generan entre las poblaciones beneficiarias o partícipes y su mayor o menor alejamiento entre los objetivos propuestos y los resultados alcanzados. Es

47 El hecho de que el quehacer del CEPP no fuera incompatible con la línea productivista y desarrollista de CESA no impidió el estallido de fricciones entre ambas instituciones. En cierto sentido, es lógico el recelo que sentía CESA hacia ellos, por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el sesgo más ideologizado del Proyecto Cotopaxi, más empeñado en fomentar la participación de los comuneros y el fortalecimiento organizativo que en maximizar exclusivamente la eficiencia de las inversiones en términos productivos. CESA, en esa época, se había escorado hacia una senda claramente tecnocrática (recuérdese que Germán León ya había salido de la zona). En segundo lugar, y acaso más importante, el CEPP se había inmiscuido en el territorio de CESA, situación que generaba recelos por parte de algunos miembros de esta agencia. Entrevistas a Miguel Gaibor (19/09/2003) y a Fernando Larrea en Quito (23/10/2003).

48 Más de 600 en 1990, generando un *stock* anual de hasta 500 quintales en semilla de papa, lo que equivalía a poder sembrar unas 25 hectáreas por ciclo (ver Sylva, 1991: 77).

49 “Los dirigentes [...] no quieren ser considerados gamonales o patrones que impiden *buanllar* [robarle al patrón en la cosecha, vieja práctica campesina antes de la Reforma Agraria], como lo hacían los capataces de las haciendas” (Eguiguren, 1995: 121).

50 Paola Sylva reconocía que el porcentaje que recibía la OSG “como reembolso del crédito en especie no permite recuperar la inversión realizada, porque el 40 % que el campesino entrega no compensa el creciente costo de los insumos y porque, además, el sistema de cosecha decidido por cada familia impide conocer con exactitud el volumen producido” (1991: 77).

verdad, por un lado, que el énfasis puesto por agencias como CESA o el CEPP en la importancia de la formación de los sectores subalternos contribuyó a armar, como vimos, una “certeza” alrededor de esos saberes transmitidos —primero desde las instituciones de desarrollo, después desde el colegio Chaquiñán—, alimentando la creación de nuevas necesidades —demandas de más y más intervenciones, constituyéndose en sí mismas “en una necesidad manifiesta de los campesinos” (Ramírez, 2002: 115)— y convirtiéndose en un insumo cuya concentración espoleó aún más los procesos de diferenciación interna. Pero es cierto a la vez que la incidencia de una determinada intervención (de un proyecto) sobre la realidad no es unívoca, y que las personas receptoras no son meras figuras de barro que se moldean en función de la orientación de la agencia de turno. Muy al contrario, coincidimos con Edison Hurtado (2005) en que resulta sumamente interesante, más allá de analizar cómo se crean verdades sobre la realidad y cómo a partir de estas se legitiman intervenciones, se explican fracasos y se define la identidad de los beneficiarios, no olvidar que, a través de los proyectos, “el que “habla” no es el “triumfante discurso del desarrollo”, sino un específico entramado de prácticas sociales (un campo) construido con base en discriminaciones de clase, de etnia y de género”: en este sentido, un proyecto concreto y sustantivo puede definirse, utilizando una terminología bourdiana, “como un campo en donde entran en juego un conjunto de capitales [económico, social, simbólico] y donde se recrean *habitus* específicos” (Hurtado, 2005: 19 y 20). Alberto Arce y Norman Long (2000) se refieren con el nombre de “contra-trabajo” (*counterwork*) a esas transformaciones —por cierto inevitables— que los grupos sociales llevan a cabo en cualquier intervención de desarrollo (proyecto, tecnología, modo de conocimiento u otros) al reposicionarla en su particular universo social y cultural y dándole, así, un sentido propio. Ese “contra-trabajo” suele conllevar, desde su punto de vista, la recombinación de elementos de varios contextos y tradiciones sociales y culturales en maneras que transforman la intervención de modo a veces muy significativo.

Eso implica, volviendo a Bourdieu, que si tomamos el ámbito de un proyecto como un campo de juego donde cada uno de los actores que participa lo hace desde su experiencia histórica acumulada (su “cultura” o, si se prefiere, sus *habitus*), el producto final será la resultante del complejo haz de fuerzas sociales que intervienen en todo ese proceso dialéctico que se despliega en el campo de juego. En el caso que nos ocupa, una cosa es la voluntad transformadora del CEPP y su visión más o menos romántica de la solidaridad andina —de donde emanó su apuesta por la “recuperación” de formas consuetudinarias de cooperación en el trabajo— y otra muy distinta las formas de interlocución con la agencia desplegadas desde la UNOCANC, sus organizaciones filiales y las familias campesinas: destiladas del humo de larga duración secular, de su dilatadísima experiencia de intermediación con el mundo blanco-mestizo a través del caleidoscópico universo de la dominación hacendaria; las familias partícipes del *randimbo* tradujeron a su realidad cotidiana, desde su espacio fáctico, el tipo de relación que históricamente han mantenido con ese mundo percibido como dominante, adaptándolo a las circunstancias y reaccionando



de un modo absolutamente racional ante la incredulidad e incomprensión de los bienintencionados cooperantes que no alcanzaban a comprender la complejidad y la lógica profunda —y tal vez no intencional— de la respuesta indígena. De nuevo, es la perspectiva temporal de amplio espectro la que nos puede ayudar a tener claves interpretativas del —a simple vista— desconcertante comportamiento campesino.⁵¹

Recapitulando

En los últimos veinte años, son numerosas las voces que han llamado la atención sobre las implicaciones de la globalización en el mundo rural. Implicaciones que tienen que ver con la misma redefinición de la noción de “ruralidad” y, naturalmente, con los desafíos que suponen y las sinergias que desatan —en procesos como los de América Latina— en el seno de una agricultura familiar sometida a un alargamiento sin precedentes de su *hinterland*. Para el caso ecuatoriano, Luciano Martínez ha señalado cómo las economías campesinas han dejado de ser parte de “una sociedad eminentemente local para pasar a pertenecer a un espacio más amplio que pertenece a la dimensión mezo o regional y se encuentra en proceso de vincularse con la dimensión más macro o global”. Es ahí donde se puede hablar de “glocalidad”, pues “el nivel local ya no es autosuficiente”, en tanto inserto “en una dinámica más larga, más amplia, determinada por dinámicas externas que ejercen una situación de dominación estructural sobre la primera” (Martínez Valle, 2004: 3). En realidad, ese proceso de “glocalización” viene de lejos, y en su conformación ha jugado un rol protagónico el aparato del desarrollo —desde las financieras multilaterales hasta las ONG y las agencias ministeriales estatales— por la tenacidad de sus intervenciones en pos de la modernización capitalista y la adecuación de los campesinos a los parámetros de las economías hoy llamadas “emergentes”: si en los sesenta y setenta se insistía en la indispensabilidad de su integración —vía Reforma Agraria— en las estructuras económicas nacionales, de los ochenta en adelante se priorizará, en el mejor de los casos, la búsqueda de su inserción a un escenario global cada vez más interconectado y a menudo desprotegido.

51 Tal como muy bien concluía Amparo Eguiguren tras su brillante análisis de la experiencia del CEPP, “Si un proyecto de desarrollo no tiene los resultados económicos esperados por la agencia de desarrollo, cabe preguntarse si se puede atribuir como causa para ello la existencia de una racionalidad distinta que privilegia la redistribución de recursos antes que la acumulación de capital [...]. Las prácticas y evaluaciones campesinas en los proyectos de desarrollo no son repeticiones inalteradas de prácticas ancestrales o resultados de sistemas simbólicos andinos previos a la conquista española. Tampoco sus prácticas y sus construcciones de sentidos son modelos de pensamiento y acción impuestos por las agencias o por el “modelo occidental de desarrollo” [...]. El desarrollo en sí mismo (sus significados y sus prácticas) es construido en la interacción y negociación entre campesinos, agencias de desarrollo, financieras, entidades estatales, etc.” (1995: 138).

La dilatada experiencia de CESA en las tierras altas de Toacazo permite reseguir en sí misma los vericuetos de la microhistoria del desarrollo rural en los Andes entre las décadas de 1970 y 1990. De una forma de entender el rol de la institución próxima a muchos de los planteamientos de la izquierda clásica —no es casual ni gratuita la connivencia entre el promotor de la agencia en Cotopilaló y los alfabetizadores miristas, por ejemplo—, a una tecnocracia al servicio de la adaptación de algunas (y subrayo lo de algunas) economías campesinas a los requisitos ineludibles del mercado en un escenario marcadamente neoliberal de los ochenta en adelante. Otra forma de ver el asunto es entendiendo el rol jugado por ONG como CESA desde el punto de vista de la economía política del neoliberalismo y toda su retórica y su praxis antiestatalista: el de una verdadera sustitución de los poderes públicos por parte de ese tipo de organizaciones privadas de cooperación cada vez más dependientes, de paso, de la propia lógica del modelo macroeconómico del que algunas (y el CEPP es un ejemplo) pueden incluso haberse definido como divergentes y alternativas.

Los veinte años de presencia de CESA en la zona como la principal institución de soporte de la UNOCANC, además, en la medida en que profundizaron la vía tecnocrático-desarrollista propia de la época, fueron también cruciales para ir cimentando un estado de opinión generalizado —una suerte de sentido común— alrededor del consenso en que el reparto agrario era cosa del repertorio del pasado (salvo en los casos puntuales que examinamos con detalle en el capítulo 4)⁵² y que la única alternativa posible e imaginable de cara al futuro pasaba, indefectiblemente, por garantizar la afluencia de nuevas ONG y financieras que, a través de nuevos proyectos, permitan al final de los tiempos una razonable inserción de las economías domésticas locales a los vaivenes de una economía cada vez más glocalizada. Contemplado desde la perspectiva de los años transcurridos, tal vez ése sea el sentido último de los procesos de diferenciación interna acelerados por el despliegue de un modelo *farmer* clásico sobre las tierras altas de Toacazo: un modelo que, a base de la concentración de los recursos sobre una parte relativamente pequeña del conjunto de comunas y cooperativas objeto de la intervención, accionó los mecanismos de la movilidad social de manera exclusiva y excluyente, con un carácter ciertamente poco alternativo respecto a los credos de la economía neoclásica y facilitador, en suma, de la instrumentalización de la organización de segundo grado local para tratar de garantizar la reproducción de esas estructuras desiguales y desigualitarias dentro de un ya de por sí sumamente desigual mundo indígena-campesino.

Los desafíos de cara al futuro son ingentes. Por un lado, la propia deriva de una economía nacional dolarizada en el contexto de una economía global que funciona

52 De hecho, muy a pesar de los éxitos alcanzados en la franja de Tiliche y en los páramos de Tusualó, lo cierto es que la última gran hacienda de Toacazo (Razuyacu) resistió los embates de la UNOCANC y que en la mayor parte de los casos el acceso a más tierras fue posible por su venta por parte del patrón Tapia, más que por una suerte de fase final del ciclo redistributivo. Ver capítulo 4, “La persistencia de los conflictos por la tierra”.

con base en los parámetros neoliberales más clásicos —y esta es una constatación que va más allá de la orientación neo-estatalista del régimen consagrado en la nueva Constitución de 2008— sitúa a las unidades domésticas serranas en una encrucijada imposible o, cuando menos, de difícil resolución. Por otra parte, el propio deterioro ambiental desencadenado en escenarios alto-andinos como los de Toacazo por el paquete tecnológico de la revolución verde —en especial la desertización de los páramos y la amenaza permanente sobre los acuíferos— hipoteca seriamente, tal vez, la propia capacidad incluso para imaginar, parafraseando a Arturo Escobar (1997), no ya vías de desarrollo alternativo para los productores en condiciones más desfavorables, sino horizontes oteables de alternativas al desarrollo.

Acrónimos y abreviaturas

CEPP	Centro de Educación y Promoción Rural
CESA	Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
CICDA	Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
DRI	Desarrollo Rural Integral
ECLOF	Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos
ERPE	Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador
IERAC	Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización
ONG	Organización No Gubernamental
OSG	Organización de Segundo Grado
PRODECO	Proyecto de Desarrollo Rural de Cotopaxi
PRODEPINE	Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador
SEDRI	Secretaría de Desarrollo Rural Integral
TTP	Proyecto Tanicuchí-Toacazo-Pastocalle
UNOCANC	Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi

Referencias citadas

- Arce, Alberto y Norman Long (eds.) (2000). *Anthropology, Development, and Modernities*. Londres: Routledge.
- Arellano, marco Antonio y Galo Jewinson Chamorro (2007). “Desarrollo sostenible con enfoque territorial del cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi”. Tesis de maestría en Gerencia de Empresas. Guaranda: Universidad Estatal de Bolívar.
- Barragán, Fernando y Felipe Miguel Valdez (2008). “Dinámicas agrarias y avance de la frontera agraria en el sector de Wintza, parroquia de Toacazo”.

- Tesis de ingeniería en Ciencias Geográficas y Desarrollo Sustentable. Quito: PUCE.
- Bestard, Joan y Jesús Contreras (1987). *Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos. Una introducción a la Antropología*. Barcelona: Barcanova.
- Bourdieu, Pierre (1991). *El sentido práctico*. Madrid: Taurus.
- Bourdieu, Pierre (2006). *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.
- Bretón, Víctor (2001). *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos. Ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo*. Quito: FLACSO.
- Bretón, Víctor (2004). "Las organizaciones no gubernamentales y la privatización del desarrollo rural en América Latina". En *Entre las gracias y el molino satánico: lecturas de antropología económica*, Paz Moreno (ed.): 463-483 Madrid: UNED.
- CESA. (1974). *Una experiencia en desarrollo rural*. Quito: CESA
- CESA. (1978). *Proyecto de desarrollo rural de las comunidades campesinas de Tanicuchi, Toacazo y Pastocalle (provincia de Cotopaxi)*. Quito: CESA / Banco Central del Ecuador (mimeo).
- CESA. (1989). *Campesinado y entorno ecosocial. Diagnósticos socioeconómicos en cinco áreas de acción de CESA*. Quito: CESA.
- CESA. (1992). *Logros y traspies del desarrollo rural contados por CESA. 25 años compartiendo esfuerzos campesinos*. Quito: CESA.
- CESA. (1997). *El campesinado de Chimborazo: situación actual y perspectivas*. Quito: CESA.
- CESA y UNOCANC (1987). *Una experiencia de participación campesina. Proyecto TTP (Etapa III)*. Toacazo: CESA / Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, Toacazo (mimeo).
- Cloke, Paul y Jo Little (1990). *The Rural State? Limits to Planning in Rural Society*. Oxford: Clarendon Press.
- Cotlear, David (1988). "Cambio institucional, derechos de propiedad y productividad en las comunidades campesinas". *Revista Andina* n° 1, vol. 6: 7-50.
- Ege, Willi (1992). *Evaluación final del Proyecto LA 135/ ECU 110-87 "Programa Integral Rural de Desarrollo TTP"*. Bonn: Agro Acción Alemana (mimeo).
- Eguiguren, Amparo (1995). "La teoría de la práctica aplicada a la interpretación del desarrollo rural. El caso de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi". Tesis de maestría. Quito: FLACSO.
- Escobar, Arturo (1997). "Antropología y desarrollo". *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, n° 154.
- Foster, George (1980). *Las culturas tradicionales y los cambios técnicos*. México: FCE.
- Hurtado, Edison (2005). "Exporting democracy: apuntes sobre el campo-aparato de la cooperación internacional para la democracia". Caracas: Concurso Internacional de Ensayos de Investigación Cultura y Transformaciones Sociales, CIPOST.



- Jordán, Fausto (1985). *Propuesta de servicios para la comercialización (Tanicuchí, Toacazo, Pastocalle, Saquisilí y Canchagua)*. Quito: CESA.
- Larrea, Fernando (2010). “Estado neoliberal y movimiento indígena: neoindigenismo, biopolítica y representación”. Tesis de maestría. Quito: FLACSO.
- Martínez Valle, Luciano (2002). *Economía política de las comunidades indígenas*. Quito: ILDIS / Abya-Yala / OXFAM / FLACSO.
- Martínez Valle, Luciano (2004). “Los límites de la agricultura campesina en la nueva ruralidad”. Ponencia presentada al XXV International Congress of the Latin American Studies Association. Las Vegas.
- Moncayo, Ramiro (1987): *Evaluación de la presencia de CESA en el área TTP*. Saquisilí: CESA (mecanografiado).
- Quishpe Bolaños, Jorge Marcelo (1999). *Transformación y reproducción indígena en los Andes septentrionales. Los pueblos de la provincia de Sigchos, siglos XVI y XVII*. Quito: Abya-Yala.
- Ramírez, Franklin (1995). “Más desarrollo, por favor. Desarrollo y capacitación. Su efectividad política: el caso de la UNOCANC”. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Humanas. Quito: PUCE.
- Ramírez, Franklin (2002). “Para re-pensar el projectismo: poder, conocimiento y sujetización en las intervenciones de desarrollo”. En *Versiones y aversiones del desarrollo*, René Ramírez (ed.): 103-139. Quito: SIISE / CIUDAD / Universidad Andina Simón Bolívar.
- Rogers, Everett M. y Lynne Svenning (1979). *La modernización entre los campesinos*. México: FCE.
- Schultz, Theodor W. (1967). *Modernización de la agricultura*. Madrid: Aguilar.
- Schultz, Theodor W. (1969). *La crisis económica de la agricultura*. Madrid: Alianza.
- SEDRI. (1983). *Proyecto de Desarrollo Rural Integral Tanicuchí, Toacazo, Pastocalle. Diagnóstico y componentes del Proyecto*, vol. 1. Quito: SEDRI / Proyecto PNUD-FAO.
- Sylva, Paola (1991). *La organización rural en el Ecuador. Autogestión, desarrollo y movimiento social*. Quito: CEPP / Abya-Yala.
- UNOCANC (1999). *Plan de Desarrollo Local*. Planchaloma: UNOCANC / PRODEPINE.
- Viera, Miguel (2009). *Estudio de caso: el desarrollo rural, la cooperación internacional y la interculturalidad en la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC)*. Quito: Ciudad Centro de Investigaciones (mimeo).
- Zamosc, León (1995). *Estadística de las áreas de predominio étnico de la Sierra ecuatoriana. Población rural, indicadores cantonales y organizaciones de base*. Quito: Abya-Yala.